DIARIO

DE LAS

SESIONES DE CORTES.

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOSO.

SESION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 1821.

Leída y aprobada el Acta de la sesion ordinaria anterior, se mandaron agregar á ella los votos siguientes: el de los Sres. Desprat, Navarro (D. Felipe), Yuste, Quintana y Gasco, contrario á la resolucion de las Córtes por la cual aprobaron el art. 4.º de las adiciones sobre diezmos, relativo á la indemnizacion de los partícipes legos: el de los Sres. Quintana, Desprat, Vadillo y Camus Herrera, contrario á la resolucion de las Córtes por la cual acordaron que la cobranza de los diezmos se haga con arreglo á la práctica y á las leyes; y últimamente, el del Sr. Urruela, contrario á la aprobacion dada ayer por las Córtes á los 10 artículos, y singularmente al 4.º, 8.º y 9.º del decreto sobre diezmos.

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Península, en el cual hacia presente que estando para circularse el decreto de las Córtes de 9 de Mayo último, se recibió el del día 12, y que habiéndose advertido cierta diferencia entre lo que disponen ambos acerca de la inteligencia que se da al párrafo 5.º del art. 25 de la Constitucion, que trata de la suspension de los derechos de ciudadano, se habia detenido su circulacion, y los remitia á las Córtes para que aclarasen aquel punto en uno de los dichos dos decretos que lo necesitase. Mandaróse estos pasar á la comision primera de Legislacion.

A la de Poderes se mandaron pasar dos cartas que remitia el Secretario del Despacho de la Gobernacion

de Ultramar, del jefe político superior de las provincias de Venezuela, en que daba cuenta de las causas alegadas por D. Nicolás de Castro para no admitir el encargo de Diputado á las presentes Córtes, para el cual se hallaba electo por aquellas provincias.

Por el Secretario del Despacho de Hacienda se pidió á las Córtes la competente autorizacion para poder distribuir por vía de limosnas en la temporada de San Juan, segun era de costumbre, la cantidad de 20.000 rs. vellon, que el comisario general de Cruzada, en virtud de excitacion del Gobierno, ofrecia poner á su disposicion para aquel objeto, siempre que se le relevase de la responsabilidad que en esta parte pudiese tener, á cuyo fin acompañaba su exposicion el expresado Secretario del Despacho. Las Córtes mandaron que este negocio pasase con urgencia á la comision ordinaria de Hacienda.

A la de Guerra se pasó una contestacion dada por el Conde de la Bisbal al Gobierno, que éste remitia á las Córtes por conducto del Secretario del Despacho de la Guerra, para la conveniente resolucion, en cuanto solicitaba la aprobacion de varios empleos que concedió en la Mancha, y que omitió en su propuesta anterior por la precipitacion con que la hizo, y entre ellos el de comisario de guerra á D. Joaquin María Rendon, de quien acompañaba una solicitud pidiendo la confirmacion de dicho empleo, con otros antecedentes que habia en aquella Secretaria relativos á este sugeto.

A la comision ordinaria de Hacienda se pasó un oficio del tesorero general, que remitía el Secretario de Despacho de Hacienda, que insertaba otro de la Contaduría de la distribucion, dirigido á que se declarase por las Córtes si el pago de 26.937 rs. y 4 mrs. vn., procedentes de gastos de la Secretaría del Consejo de Estado, causados desde el 21 de Marzo hasta fin de Junio de 1820, estaba comprendido en el decreto de 9 de Noviembre último, en que se mandó el corte de cuentas, segun opinaban aquellas oficinas.

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de Ultramar remitió con calidad de devolucion el expediente seguido en su Secretaría, y del que emanó la circular de 11 de Enero último, declarando haber salido los indios del estado de minoridad á que se hallaban sujetos, y que por lo mismo no debia existir el empleo de protector de indios; cuyo expediente creia era el que se habia pedido en consecuencia de la indicacion hecha por los Sres. Hermosilla y Milla en la sesion de 12 de Mayo último. Este expediente se mandó pasar á la comision de Ultramar.

A la que está encargada de demarcar los limites entre las atribuciones de los jefes políticos y Diputaciones provinciales, se mandó pasar el expediente que remitió el Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Península, instruido en virtud de lo expuesto por el jefe político superior de la provincia de Madrid, sobre la necesidad que hay de crear en ella un jefe político subalterno; cuyas razones estimaba el Gobierno muy atendibles, conformándose con el dictámen del Consejo de Estado, el cual opinaba se estableciesen en Madrid dos jefes políticos subalternos, cuyas atribuciones se detallaban en un papel que acompañaba al expediente.

Mandóse pasar con urgencia á la comision ordinaria de Hacienda el expediente remitido por el Secretario del Despacho del mismo ramo, formado con motivo de los entorpecimientos que se habian hallado para hacer efectiva la contribucion impuesta á la ciudad de Barcelona en equivalencia de los derechos de puertas, y para cuya realizacion pedia la Diputacion provincial se le permitiese la facultad de repartir un tanto entre los vecinos, y cobrar el resto en las mismas puertas.

El mismo Secretario del Despacho, en contestacion al oficio que se le pasó de orden de las Córtes con fecha 8 del actual, manifestaba que al recibirlo tenia ya extendida la exposicion que acompañaba sobre la reforma de la ley de aranceles, con arreglo á la resolucion de 13 de Abril último, habiendo tenido presente para ello lo expuesto por la Junta de aranceles acerca de dicha reforma, habilitacion y variacion de aduanas, contraregistros y depósitos, acompañando el expediente general formado con este motivo, el cual se mandó pasar á las comisiones reunidas de Comercio y especial de Hacienda.

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Secretario del Despacho de la Gobernacion de Ultramar, con el cual dirigia los documentos que habia remitido al Gobierno el jefe político superior de Costa-Firme, por lo que constaba haberse jurado la Constitucion en varias ciudades y pueblos de aquella provincia; cuyos documentos mandaron las Córtes se archivasen.

Prestó juramento y tomó asiento en el Congreso el Sr. Obregon, Diputado suplente por la provincia de Guajuato, en Nueva-España, cuyos poderes se aprobaron en la sesion ordinaria de ayer.

El Sr. Quirós presentó las siguientes proposiciones, que se declararon leidas por primera vez:

«Con el importante objeto de sacar á la provincia de Sonora del estado de abyeccion y nulidad en que desgraciadamente ha permanecido hasta ahora, pido á las Córtes se sirvan aprobar los artículos siguientes:

Artículo 1.º Que con toda la brevedad posible se recojan las herramientas y utensilios que se habian conducido á la ciudad de Arispe para poner casa de moneda en el gobierno del Sr. D. Carlos III, y se traigan á la villa del Fuerte de Montes Claros, á fin de establecerla allí prontamente, uniformando con toda exactitud su tipo y amonedacion á la de Méjico.

Art. 2.º Que se excite al Gobierno para que disponga la remision de algun azogue á San Blas por Portobelo y Panamá, consignando expresamente á Sonora 1.500 quintales.

Art. 3.º Que se habiliten los puertos menores de Teacapan en el Rosario, los de Navito y Tata en Culiacan, el de Haome en la citada villa de Fuerte, el de Santa Cruz de Mayo en Alamos, y el de los Algodones en el Hiaquí, con algun otro que pueda haber hasta Guaymas.

Art. 4.º Que por diez años se conceda libertad de derechos á los frutos que se embarcaren de uno á otro puerto, con tal que sean de los indígenas de la provincia, tanto naturales como industriales, y además en buques propios, ya por los naturales de ella, ó por cualquiera de sus habitantes.

Art. 5.º Que la misma gracia se entienda con las exportaciones que se hagan para los demás puertos del mar del Sur, como San Blas, Acapulco, Panamá, etc., y los de las Californias; pero debiendo excluirse en este y en el artículo anterior el oro y plata en pasta y las perlas, que pagarán los derechos que correspondan segun las leyes.

Art. 6.º Que fundándose inmediatamente la catedral, cabildo eclesiástico y seminario conciliar, se haga desde luego la aplicacion respectiva de diezmos con arreglo á la práctica de aquellos obispados y leyes que rigen en la materia, dedicando al seminario toda la renta que produce el vino mescal, la pension conciliar y los fondos además de que habla la cédula de 28 de Febrero de 1807.

Art. 7.º Que dotados los destinos y cátedras muy precisas al colegio, se establezcan con todo el sobrante de las rentas becas para niños pobres, debiendo ser la tercera parte de éstos españoles, otra de niños cuyos padres sean indios reducidos, y la otra de niños de indios bárbaros. Todos podrán hacer su carrera con esperanza de optar á toda suerte de beneficios eclesiásticos, pero

serán siempre más atendidos los que hubieren misionado entre paganos; de manera que el eclesiástico que se hubiere empleado en aquel recomendable y santo ministerio el tiempo de diez años, tendrá tanto mérito como el cura que haya servido veinte á los fieles del obispado.

Art. 8.º Que se mande estrechamente á la Diputacion provincial proponga premios al español, europeo ó americano y de cualquiera clase y condicion que fuere, que sepa aprovechar mejor los frutos y producciones de aquel país, como el añil, grana y tabaco silvestre, la jobja, gomilla de Sonora, ojasen, sal catártica y mármol del valle de Oposura, con todas las maderas preciosas y de construccion, como al que se dedicase á su cultivo y perfeccion, ó al que sembrare lino, cáñamo, etc., estableciendo sus respectivos beneficios, con tal que en todos estos casos publique sus conocimientos á fin de generalizarlos en la provincia.»

Hizose la segunda lectura de las proposiciones de los Sres. Castro, Michelena, Ramos Arispe, Couto, Medina, Amati, Moreno, Sanchez, Ramirez y La-Llave (D. Pablo), leidas por primera vez en la sesion de 9 del presente mes. Para fundarlas, dijo el Sr. Castro que no siendo lo que se pedia en estas proposiciones otra cosa que una ampliacion del decreto de las Córtes de 27 de Setiembre del año pasado, por el cual se concedió la amnistía á los disidentes de América, parecia no debia haber inconveniente en admitirlas, y que podrian pasar á la comision que entendió en este asunto para que las examinase. A esto añadió el Sr. Ramos Arispe que como las leyes permitian antes el confisco, se habia creido allí que no estaba éste derogado, y que se hallaban informados, en cuanto cabia, los señores que hacian las proposiciones de que existian todavía algunos bienes sin devolverse, y que creian no habria inconveniente en dar esta ampliacion á una ley que la falta de ocurrencia, y si se queria de talentos, habia hecho que tuviera este pequeño defecto. Convino tambien en que pasando á la comision de Ultramar las proposiciones, presentase ésta su dictámen. Al Sr. La-Riva pareció que lo que se creia un defecto no pudo ser falta de ocurrencia, porque la base que se habia tenido presente para la amnistía de los disidentes de América habia sido la misma que se tomó para la amnistía de los españoles emigrados á Francia; y puesto que en ésta no se trataba de bienes que estuvieran enajenados, parecia que siendo esto una excepcion, no debia mirarse como un simple olvido. Repuso el Sr. Castro que los bienes que se pedia que se devolviesen no eran los enajenados, sino los que no hubiesen pasado á dominio particular, como se habia hecho aquí, y constaba por uno de los artículos del decreto de 26 de Setiembre, en el que se habia mandado se devolvieran á los emigrados á Francia los bienes que existieran y no hubiesen sido enajenados: que á semejanza de esto, lo que se pedia era que se devolviesen á los disidentes de América los bienes que estuviesen en depósito ó sus valores, porque la misma razon hallaba para que se les reintegrasen sus bienes que los demás efectos secuestrados, siempre que estuviesen depositados.

Declaróse el punto suficientemente deliberado; y admitidas las proposiciones á discusion, se acordó pasasen á la comision de Ultramar.

Tambien se leyó por segunda vez la proposicion que hizo el Sr. Rey en la sesion extraordinaria del 30 de Mayo, relativa á señoríos; la cual, admitida á discusion, se mandó pasase á la comision que entendió en el proyecto de ley relativo á este particular.

Las Córtes se sirvieron aprobar los dos siguientes dictámenes de la comision de Infracciones de Constitucion:

Primero. «El ayuntamiento de la Habana pide se declaren nulos los nombramientos que para jueces interinos de primera instancia ha hecho el jefe político con la Diputacion provincial en virtud de una Real orden de 22 de Setiembre último. Dice al efecto que ésta es anticonstitucional, como contraria al art. 171 de nuestra Constitucion, en el que, entre las facultades que se conceden al Rey, es la cuarta la de nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, á propuesta del Consejo de Estado. Supone tambien el ayuntamiento infringido el decreto de 9 de Octubre, en cuanto previene que los jueces de primera instancia presten el juramento de su oficio en la Audiencia del territorio, pues en el título que para juez de primera instancia del partido de la Habana ha expedido el jefe político al licenciado Don Francisco Filomeno, le dispensa de presentarse al efecto á la Audiencia, y le manda lo verifique en sus manos á presencia de la Diputacion provincial.

La ley de 9 de Octubre autoriza á los jefes políticos en Ultramar para nombrar jueces de primera instancia en casos de ausencia y enfermedad. En el año 1813 fueron autorizados en la Península por las Córtes extraordinarias para nombrarlos en los territorios de que se retiraba el ejército francés. Colígese de esto que la citada Real orden de 22 de Setiembre último se ha apoyado en dichos fundamentos, y además que no se contradice con el mencionado artículo de la Constitucion, el que debe entenderse de los nombramientos propietarios, y no de los interinos, cuales son los de que se trata. Aparece, sin embargo, una infraccion de la ley de 9 de Octubre en haber dispensado el jefe político al licenciado Filomeno de prestar el juramento en la Audiencia territorial; mas la declaracion sobre ella, además de no ser de las atribuciones de las Córtes, tiene á su favor la perentoriedad que recomienda á aquel jefe político la referida Real orden de 22 de Setiembre, en cuyo obsequio no pudo menos de evitarse al juez nombrado el costoso y prolijo viaje de 300 leguas que debiera hacer para presentarse en la Audiencia territorial.

La comision opina, por lo mismo, que no há lugar á la formacion de causa.»

Segundo. «El ayuntamiento de Guanajay, en la provincia de la Habana, supone infraccion de Constitucion en el nombramiento de juez de primera instancia para aquel partido por el jefe superior político con la Diputacion provincial, en virtud de una Real orden de 22 de Setiembre de 1820; y en el hecho de haber designado para residencia del mismo juez el lugar del Mariel, sin embargo de que en el año de 1813 era Guanajay la cabeza de partido. (Véase la sesion de 9 de Mayo último.)

Para la primera suposicion se funda en el art. 171 de la Constitucion, que concede al Rey la facultad de nombrar los magistrados para todos los tribunales, á propuesta del Consejo de Estado; y para la segunda, en el artículo 278, que dice: «Se establecerán partidos pro-

porcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido habrá un juez de letras con un juzgado correspondiente.» Añade el mismo ayuntamiento que ha negado la posesion al juez nombrado interinamente para aquel partido, porque no ha prestado el juramento en la Audiencia territorial, y sí en manos del jefe político en presencia de la Diputacion provincial; y que en consecuencia han sido multados los alcaldes con 1.000 pesos, y los regidores con 500, y aun amenazados con la fuerza si no cumplen lo que ya se les ha mandado por segunda vez en cuanto á la admision del dicho juez de primera instancia.

El citado art. 171 de la Constitucion no puede aplicarse sino á los nombramientos propietarios: la Real orden de 22 de Setiembre se apoya naturalmente en la ley de 9 de Octubre, que autoriza á los jefes políticos de Ultramar para el nombramiento de jueces interinos de primera instancia en casos de ausencia ó enfermedad, y en las medidas que al mismo efecto tomaron las Córtes extraordinarias en el año 1813 en los territorios de que se iba retirando el ejército francés.

El art. 273 de la Constitucion no designa, ni fué posible que designase el pueblo que debe ser cabeza de partido; y por consiguiente, habiendo resuelto el jefe político que la residencia interina del juez de primera instancia sea Maniel, contra los deseos de Guanajay, no se ha puesto en contradiccion con dicho artículo.

Cuando el jefe político ha impuesto la indicada multa al ayuntamiento de Guanajay, y aun amenazádole con la fuerza si persistia inobediente, no ha hecho más que usar de las facultades que se le conceden por el art. 1.º del capítulo III del decreto de 23 de Junio de 1813, sobre el gobierno económico-político de las provincias.

Aparece con todo una infraccion de la ley de 9 de Octubre, en cuanto á que el juez nombrado para el partido de Muriol juró en manos del jefe político á presencia de la Diputacion provincial. Mas esta infraccion debe ser reclamada ante el poder judicial, y de ninguna manera ante el legislativo.

Con estos antecedentes, opina la comision que no há lugar á la formacion de causa por ninguno de los motivos que alega el ayuntamiento de Guanajay.»

La misma comision presentó otro dictámen, que tambien fué aprobado, y decia:

«Con fecha de 10 de Setiembre próximo pasado ocurrió á las Córtes D. Lucas Antonio Serrano, doctor en farmacia, vecino de la ciudad de Murcia, acusando al alcalde primero de aquella capital, D. Alfonso García Vergara, como infractor de los artículos 4.º y 284 de la Constitucion (*Véase la sesion de 4 de Marzo último*), porque habiéndose suscitado contestaciones acaloradas entre Serrano y D. Antonio Arjona, visitador de boticas, en un juicio de conciliacion á que fueron citados ante el mismo alcalde, suspendió éste el acto, mandó á Serrano en calidad de detenido á su casa, y le exigió despues 422 reales de costas por la causa criminal que le formó sobre la expresion de *anticonstitucional*, que habia dirigido al visitador de boticas, incluyendo en aquella suma los derechos del juicio de conciliacion, que no se realizó en concepto de Serrano. El alcalde representó en 10 de Octubre del mismo año, justificándose de la acusacion de Serrano y acriminando su conducta en todo el negocio,

con referencia á varios documentos que acompaña á su representacion. Entre otros documentos hay señalados con el núm. 2, una certificacion del escribano D. Gabriel Martinez, sobre el motivo y la suspension del juicio de conciliacion, y un testimonio del que se celebró al otro dia; y señalado con el núm. 3, otro testimonio de la causa criminal formada contra Serrano, de los antecedentes de ella, y de la tasacion y cobranza de las costas, los cuales comprueban lo siguiente:

Comparecieron ante el alcalde en la tarde del 10 de Julio á juicio de conciliacion el referido Serrano y otros profesores de farmacia, como demandantes, y Arjona, visitador de boticas, como demandado, acompañados de sus respectivos hombres buenos. Principióse la conferencia entre unos y otros, y habiendo dicho Serrano al visitador de boticas que era un *anticonstitucional*, suspendió el alcalde el juicio y proveyó un auto cabeza de proceso contra Serrano. Pero al dia siguiente se citó por disposicion del alcalde á los interesados para el anochecer, á fin de realizar el juicio de conciliacion: concurrieron todos en efecto, pues aunque faltó Serrano, representó su persona D. Bartolomé Colomar, y se logró conciliar á las partes. En la misma noche compareció personalmente Serrano ante el alcalde, y explicó en qué sentido habia dicho que el visitador de boticas era un *anticonstitucional*, ofreciéndose á darle completa satisfaccion. Llegó poco despues el visitador, mandado llamar por el alcalde; se conformó con las explicaciones de Serrano, y se sobreyó en la causa, condenando á éste en las costas, que efectivamente se le exigieron.

No aparece, pues, que el alcalde mandase detenido á su casa á Serrano: resulta que al fin se verificó el juicio de conciliacion; y en cuanto á las costas del expediente criminal, que es otro de los extremos en que funda Serrano su queja, sea cual fuere el exceso con que se hayan graduado, nunca pudiera graduarse de infraccion de Constitucion.

Puede suscitarse la duda de si hay tal infraccion de Constitucion en haber el alcalde empezado causa contra Serrano por haber llamado *anticonstitucional* al visitador, sin que precediese el juicio de conciliacion; pero no habiendo sido esta causa un juicio de injurias, sino un procedimiento criminal que el alcalde creyó deber empezar por haber Serrano proferido en su presencia la citada expresion contra su contrario, no era necesaria ni oportuna la conciliacion en el supuesto de procederse de oficio. El alcalde podrá haberse excedido en este punto; pero además de haberse sobreyó en la causa al dia siguiente por haber Serrano explicado el sentido de su expresion, siempre le quedaba expedito el derecho contra los procedimientos del alcalde en el tribunal competente, donde tambien podia reclamar el exceso de las costas. Por todo lo cual, opina la comision no haber motivo suficiente para que las Córtes declaren haber lugar á la formacion de causa contra el alcalde primero de la ciudad de Murcia, D. Alfonso García Vergara, ó resolverá el Congreso lo que considere más justo.»

La comision de Guerra presentó el siguiente dictámen:

«Do Francisco Fernandez Vaquero, teniente agregado al regimiento de Fernando VII, acudió á las Córtes solicitando las dispensas de ley necesarias para obtener el retiro con el sueldo que actualmente disfruta, y el grado de capitán, en atencion á sus servicios militares y

patrióticos y á hallarse en la imposibilidad de seguir en el servicio activo.

La comision de Guerra, sin embargo de que al examinar esta instancia no fué de parecer, ni lo es ahora, de que se alteren los derechos vigentes sobre retiros y prohibicion de grados, no pudo menos de fijar su atencion en la série de los servicios militares distinguidísimos del exponente, en sus esfuerzos para restablecer y sostener el sistema constitucional, y en las prisiones y sufrimientos que le ha ocasionado su patriotismo; por todo lo cual creyó conveniente oír la opinion del Gobierno; y al evacuar este informe el Secretario del Despacho de la Guerra, devuelve el expediente de Real orden á las Córtes, «para que, enteradas del sobresaliente mérito y extraordinarias circunstancias y padecimientos de este oficial, puedan compensarlos con las gracias á que le juzguen acreedor, y de que es muy digno en el concepto de S. M.»

La comision, excitada por tan poderosa recomendacion, y cerciorada por los documentos justificativos que acompañan al expediente, de la exactitud de los méritos que contiene la relacion que hace Fernandez Vaquero en su instancia, si bien es de opinion que no deben alterarse los decretos vigentes sobre retiros y prohibicion de grados, juzga, no obstante, que este oficial es muy digno de que las Córtes se sirvan declarar en su favor:

1.º Que el teniente D. Francisco Fernandez Vaquero es acreedor á la gratitud nacional por sus servicios en favor de la independencia y libertad de su Pátria.

2.º Que al expedirse á este oficial por el Gobierno el retiro que tiene solicitado, se le conceda por vía de pensión vitalicia, y en consideracion á sus servicios militares y patrióticos y á los sufrimientos que ha experimentado por sus conatos en restablecer y sostener el sistema constitucional, el goce del sueldo que actualmente disfruta como teniente en servicio activo.»

Despues de recomendar muy particularmente el señor Conde de Toreno á las Córtes los distinguidísimos servicios de este interesado, y de manifestar lo sensible que le era el que no pudiesen extender más su generosidad para con este benemérito oficial, concluyó rogando al Congreso se sirviese aprobar, como en efecto aprobó, el dictámen de la comision.

Las comisiones reunidas de Legislacion y Guerra presentaron su dictámen acerca de las exposiciones de los jefes y oficiales de varios regimientos, pidiendo que sean separados de ellos los oficiales procedentes de los depósitos de Dijon y Chalons-sur-Marne; y acerca de las solicitudes de otros de esta misma clase, que se hallaban purificándose, y cuyas causas se mandaron suspender hasta que decidiesen las Córtes sobre la consulta hecha por el consejo de generales de la provincia de Valladolid. Este dictámen, y los votos particulares de los Sres. Palarea y Golfín acerca del mismo negocio, despues de leídos, se mandaron imprimir.

Leyóse tambien, y se mandó quedase sobre la mesa para instruccion de los Sres. Diputados, el siguiente dictámen, con el voto particular que le acompaña:

«La comision de Comercio se ha instruido del oficio del Secretario del Despacho de Hacienda de 29 de Abril anterior, en que á consecuencia de otro que en 9 de No-

viembre del año próximo pasado le remitieron los Secretarios de las Córtes, para que en cumplimiento de la determinacion del Congreso diese más instruccion al expediente promovido por la casa de comercio de Lóndres Gordon Murphy y compañía, devolviéndolo para la resolucion del mismo Congreso, hace presente el modo con que ha cumplimentado dicho decreto, oyendo á la Junta nacional del Crédito público, cuyo dictámen acompaña, de fecha 5 de Enero de este año, con los dos que en 14 de Febrero y 18 de Abril siguientes le ha dirigido tambien el Consejo de Estado, todos con aquel objeto, y en consecuencia de las representaciones que en 4 de Diciembre, 24 y 26 de Febrero y 15 de Abril último ha hecho la expresada casa para concluir definitivamente los negocios de que se trata.

Examinado este complicado negocio con la escrupulosidad y detencion que exige su naturaleza, teniendo presente la comision que el antecedente de que dimana fué el haber rechazado los empleados de Veracruz en 1808 dos cargamentos cuyo valor importaba un millon de pesos, contra lo estipulado en el art. 20 de la contrata que celebraron Gordon y Murphy y la Caja de consolidacion en 18 de Mayo de 1806: que las largas reclamaciones de esta casa, y las del Gobierno de España despues de aquella ocurrencia, produjeron la transaccion celebrada recíprocamente en 1.º de Abril de 1816: que por ésta se concedió á la primera para cumplimiento de la contrata la facultad de llevar á Nueva-España diez expediciones de 2 millones de valor cada una, como equivalentes á las del millon de pesos rechazados, y un permiso para introducir en la isla de Cuba 200.000 barriles de harinas de los Estados-Unidos, á fin de que su producto la indemnizase de las grandes pérdidas que se le habian ocasionado en el rechazamiento de las dos citadas expediciones y embargos posteriores que hasta el año de 1816 sufrieron en América sus efectos y propiedades; todo cuanto se ha practicado en los años últimos en virtud de Reales órdenes, para que la casa pudiese resarcir por una parte sus pérdidas, y satisfacer por otra las sumas que en razon de derechos resultase deber al Estado, concluida que sea la liquidacion de cuentas pendientes con el Crédito público; y, finalmente, considerando todos los extremos que abraza este asunto, sin separarse de la atencion que mereció á las Córtes en la legislatura anterior, deduce la comision que se estaria en el caso de acceder á las instancias de Gordon y Murphi, para que llevándose á efecto su contrata y transaccion, se le permitiese remitir á Nueva-España las seis expediciones que aun no ha realizado, si varios decretos del Congreso fuesen conciliables con esta medida, ó si las circunstancias de la Nacion fuesen en 1821 iguales á las de 1819. La sola idea de que la continuacion de estos permisos podria ser perjudicialísima al comercio español en su situacion actual, parece á la comision muy bastante para cerrarles la puerta, no obstante que procedan de contrato hecho con el Gobierno, y á pesar de haberse ratificado en Real orden de 18 de Abril del año anterior, pues no seria justo que por llevarlo adelante en beneficio de una casa extranjera, se perjudicase á muchas españolas, cuando tiene la Nacion infinitos medios para recompensar el déficit, si resultase de este contrato, y para terminarlo con la religiosidad y decoro que le son característicos.

Sin embargo, como este objeto y el de la recaudacion de las grandes cantidades que la casa debe al Erario, son de la mayor importancia, parece á la comision presentar al Congreso las cuestiones siguientes, persua-

dida de que, si se sirviese aprobar la solucion de ellas, se terminarian estos negocios del modo equitativo y justo que piden sus circunstancias:

1.^a ¿Se ha de reconocer la concordia ó transaccion hecha por el Rey en 1816, ó se ha de examinar si hubo ó no justicia para ello?

La comision opina que debe reconocerse, y que por consiguiente la casa tiene derecho: primero, al valor de las seis expediciones pendientes de las 10 que se le concedieron: segundo, á lo que se le resta por pagar del permiso de las seis expediciones de harinas, comprado por el intendente de la Habana.

2.^a ¿De qué manera se ha de graduar el valor de las seis expediciones?

La comision opina que por peritos nombrados por las partes, y tercero en discordia; pero que con el valor de estas expediciones, y lo que se adeude á la casa por el contrato hecho con el intendente de la Habana, debe pagar lo que deba al Gobierno por las contrata de expediciones y pesos fuertes de 1806, que consiste: primero, en los derechos que expresan las mismas contratas: segundo, en la cuarta parte de utilidades de las expediciones que se hicieron, estipulada á favor de la consolidacion; y tercero, el resultado que ofrezca la cuenta de pesos.

3.^a ¿Por qué reglas se ha de juzgar del valor de los derechos de los algodones y otras mercancías que no constan del arancel?

La comision es de opinion que por los que adeuden otros géneros á que más se parezcan, cuya asimilacion se declarará á juicio de peritos nombrados por las partes, y tercero en discordia.

4.^a ¿Debe Gordon y Murphy pagar el derecho de internacion?

La comision no tiene duda de que sí, por lo tocante á la importacion de los cargamentos en la Península, pues así está expreso en el convenio; pero si en esta parte resultase revocado por el Gobierno expresa ó tácitamente, tal como haberse dado orden para devolver dicho derecho en las expediciones verificadas, se estará á ello.

5.^a ¿Ha de recaer la aprobacion de las Córtes sobre el ajuste que se haga, y resultado que ofrezcan las operaciones?

La comision opina que no, y que se debe autorizar al Gobierno para que corte y transija las diferencias que aun puedan quedar pendientes. Las Córtes resolverán lo que sea justo.»

Voto particular del Sr. Desprat.

«Suscitada por la comision la duda de si debe reconocerse la contrata hecha por el Gobierno en 1816, me veo precisado á entrar en una cuestion que no promovieron el año pasado mis compañeros, y que ahora no me atrevo á resolver afirmativamente como ellos, porque se me ofrecen los reparos siguientes:

1.^o No precedió á la contrata una estimacion formal de los perjuicios para cuyo resarcimiento pretendió y obtuvo la casa de Gordon y Murphy su extraordinario privilegio.

2.^o Tampoco se liquidaron antes los derechos y demás que dicha casa debia á la Nacion española, ya que, segun dice el Crédito público, ascendian á un millon de duros.

3.^o Faltó tambien la exhibicion de pruebas para acreditar debidamente el valor de un millon de pesos

que da la casa á los dos cargamentos que no se le admitieron en Veracruz.

Si no obstante las Córtes tienen á bien agraciarse á los Sres. Gordon y Murphy con el reconocimiento de dicha transaccion, y en consecuencia autorizan al Gobierno para que corte y transija, como la comision propone, las diferencias que aun puedan quedar pendientes, opino que debe recaer la aprobacion de las Córtes sobre el ajuste que haga, y resultado que ofrezcan las operaciones. Lo fundo en que el Gobierno no debe considerarse en este caso como un simple particular que transige sobre sus propios intereses, sino que, muy al contrario, es preciso reconocer que maneja los intereses de la Nacion, y que esto le sujeta á una responsabilidad de la que no conviene relevarle en ningun caso, por ser esta una de las más preciosas garantías para el sistema representativo.

Suplico al Congreso disculpe los errores en que tal vez habré incurrido por el desseo del acierto.»

El Sr. Presidente señaló la sesion del sábado próximo para la discusion de este negocio.

Continuando la del dictámen de la comision especial de Hacienda acerca de las adiciones hechas al proyecto de decreto núm. 1.^o, sobre diezmos, antes de procederse á la del art. 11, que quedó ayer pendiente (*Véase la sesion anterior*), dijo

El Sr. Conde de **TORENO**: Ayer se resolvió por las Córtes una cosa con respecto á la indemnizacion de los partícipes legos de diezmos, la cual cree la comision que convendrá suspenderse por ahora, y es la penúltima parte del art. 9.^o, en que se dice que cuando estos partícipes prefieren tomar papel con el descuento de la plaza, se les dará. La comision cree que aunque no se seguiria perjuicio ninguno, puesto que hay una porcion de fincas muy superior para indemnizar á los partícipes legos, y más que equivalente al papel que se pusiera en circulacion, sin embargo, para que esto no produzca una alteracion sensible en el crédito, aumentando los efectos que circulan en la plaza, puede suspenderse por ahora en cuanto á esa parte que trata del papel.»

Leyóse esta parte del art. 9.^o, y se acordó quedasen suspensos sus efectos.

Procedióse en seguida á la discusion del citado artículo 11; leído el cual, dijo

El Sr. **JANER**: En vista de la adicion que yo hice á este artículo, veo que la comision ha propuesto que haya un beneficiado en la Junta diocesana que debe entender en la reparticion de los diezmos. Yo habia pedido que fuesen dos, y daré algunas de las razones en que me fundo. En Cataluña, Aragon y Valencia son muchos los beneficiados; de modo que la justicia y aun la política exige que haya algunos de ellos en la Junta diocesana. En Barcelona, por ejemplo, no hay más que siete párrocos, y hay seguramente más de 200 beneficiados. En Villafranca del Panadés, mi pátria, que tiene 800 vecinos con un solo párroco, hay 30 ó 40 beneficiados, habiéndolos generalmente en todos los pueblos de alguna consideracion. Además, los beneficiados en dichas provincias van á dejar ahora seguramente más fincas y bienes que los cabildos catedrales y las colegiatas; y de consiguiente, no hay ninguna razon para que no entre en estas juntas diocesanas un número proporcional de beneficiados. Yo me fijé en el número bas-

tante corto de dos; y si la comision, para evitar los inconvenientes que se puedan seguir de que el número de individuos que componen estas juntas sea par, quisiere ponerlo impar, sería mejor poner tres que uno. La política tambien reclama que intervengan en estas juntas diocesanas algunos beneficiados, porque seguramente en muchísimos pueblos tienen más influjo los beneficiados que los párrocos. Los beneficiados viven en los pueblos en mayor número, tienen más conexiones y están emparentados con la mayor parte de los vecinos del pueblo. Por estas y otras razones, si parece á la comision que sea el número de beneficiados impar, conviene en mi opinion que sean más bien tres que uno.

El Sr. **YANDIOLA**: Lo que ha dicho el Sr. Janer se dirige á pedir que se aumente el número de beneficiados en estas juntas diocesanas. La comision ha tenido presente que los párrocos son la única cabeza de sus parroquias, y que el beneficiado de que se habla será el que tenga aneja la cura de almas, y como tal participe de diezmos: además de que, segun el plan eclesiástico que va á discutirse, en adelante no deberá haber beneficiados, sino curas párrocos y coadjutores. Por consiguiente, estos que son ahora beneficiados, quedarán de coadjutores, y siendo partícipes de diezmos, se les da representacion por la parte que tienen en ellos. La comision ha tenido presentes las divisiones, costumbres y régimen de las provincias, en especial la de Navarra, y ha creído que con un solo beneficiado está bien representada esta clase en la Junta, pues aunque en algunas provincias, como Cataluña, sea excesivo su número, nunca podrán quejarse de la falta de representacion, porque la tienen embebida en la de los mismos párrocos.

El Sr. **OBISPO DE MALLORCA**: Quisiera que se hiciese aquí mencion expresa de las islas Baleares, y que se designase qué clase de beneficiados han de entrar á componer esta Junta diocesana.

El Sr. **CUESTA**: Aunque las islas Baleares se entienden comprendidas en la Corona de Aragon, la comision no tendrá reparo en que se pongan expresamente.

Por lo demás, en cuanto á aumento de beneficiados, me parece que basta con uno. Es necesario no desairar la parte principal del clero, compuesta de Prelados y párrocos, y darles á estos todo el influjo que con razon deben tener en estas juntas. De lo contrario sería necesario dar tambien representacion á los prestamistas y á todos los que tienen interés personal, y entonces sería esta Junta demasiado numerosa, siéndolo ya bastante.

El Sr. **GARCÍA** (D. Antonio): Me parece que debería decirse *curas propios*, porque en algunas diócesis hay curas párrocos que no son propios, sino amovibles á voluntad del Prelado.

El Sr. **CUESTA**: No hay dificultad en que se ponga *curas propios* siempre que se conserve la última parte, porque hay beneficiados que ejercen tambien la cura de almas.

El Sr. **GARCÍA** (D. Antonio): No todos los beneficiados son partícipes de diezmos; y así, podría añadirse: los beneficiados que deban percibir cuota decimal.

El Sr. **CUESTA**: Si se ha de dar representacion en esta Junta á todos los interesados, como ya he dicho, entonces será interminable, porque habrá que dársela tambien á las fábricas.

El Sr. **RAMOS GARCÍA**: Las fábricas se administran por los curas.

El Sr. **CUESTA**: Es un error, porque en muchos

pueblos los representantes de las fábricas son legos. Y aun hay más: hay bulas para que no se pueda pedir cuenta á los legos sino por los provisosores.»

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el artículo fué aprobado.

Leído el 12, preguntó el Sr. **Castrillo** quién habia de nombrar esta Junta diocesana; y el Sr. **Priego** contestó que esto ya lo decia el plan eclesiástico. En seguida fué aprobado el artículo, Tambien lo fué el 13. Los artículos 14 y 15 estaban ya aprobados en el plan general.

Leído el 16, dijo

El Sr. **DOLAREA**: El Congreso sabe que la renta de las encomiendas de las órdenes militares consiste generalmente en los diezmos y primicias que perciben los comendadores con obligacion de mantener á los párrocos, y en propiedades pertenecientes á las mismas. Con que si ahora se les quitan, ¿cuál será la suerte de tanto digno militar que las posee en premio de sus hazañas y relevantes servicios? Este asunto es digno de la mayor consideracion, y creo que así como se trata de indemnizar á los demás partícipes, debia tambien tratarse de hacer lo mismo con los comendadores, de los cuales no hay uno solo, en mi concepto, que lo sea sino por sus servicios militares. Esto reclamo, y esto exige la justicia.

El Sr. **GIRALDO**: Ya temia yo que habia de haber alguna insinuacion en favor de los comendadores de las órdenes militares, ó contraria á los pueblos que sufren este pesado yugo, cuando ayer insinué los principios de igualdad y justicia que debia haber entre los contribuyentes de diezmos en los territorios que pagan á los Obispos y los que lo hacen á encomiendas, mesa maestra ú otro cualquier partícipe: lo temia, repito; pero no podia pensar que fuese en los términos que se hace por el Sr. Dolarea, que sabe muy bien que las encomiendas son reputadas beneficios eclesiásticos; que se da colacion y hace canónica institucion, y que están sujetas al pago de subsidio y á las demás cargas del clero. Si esto es ó no monstruoso y extravagante, díganlo los amantes del orden y de la observancia de los cánones y de la disciplina de la Iglesia. Lo cierto es que casi toda la Mancha, mucha parte de Extremadura, alguna de las de Valencia, Andalucía y Murcia pagan cuantiosos diezmos á los comendadores para tener párrocos mal dotados, iglesias arruinadas é indecentes, y no encontrar los pobres y miserables los auxilios que otros hallan en sus Obispos y canónigos. Por lo respectivo á la Mancha, puede asegurarse que una de las principales causas de su desolacion es la existencia de las encomiendas, porque sale de la provincia todo lo que contribuye de diezmos, y nada se consume y gasta en ella de esta enorme contribucion, no encontrando los labradores los auxilios y socorros que los de otras partes. En la Mancha, Señor, no pueden persuadirse que pagan diezmos y primicias á la Iglesia de Dios, porque ven que los comendadores que los cobran se presentan con sus mujeres é hijos en los pueblos, y con lujo y ostentacion de seculares, y miran á sus párrocos pobres y á las iglesias sin los ornamentos precisos para las funciones diarias. ¿Y hay todavía quien pida en favor de estos perceptores? No he visto que se haga otro tanto por los Obispos, y á fé que los de Jaca, Albarracin y Barbastro cambiarían de renta con muchos comendadores; importando muy poco que los que obtienen encomiendas las hayan logrado por sus méritos, porque la disputa del dia no es para premiar servicios, sino para proceder segun lo

exige la justicia y conveniencia pública: y no todos han sido comendadores por señalados méritos; muchos hay, y todos los conocemos, que no se hallan en este caso.

Me opongo á lo que ha insinuado el Sr. Dolarea, y deseo conste en esta discusion que todos los contribuyentes de diezmos y primicias del Reino, ya sean á Obispos, cabildos, encomiendas, mesa maestral ú otros partícipes, están comprendidos en esta ley, así como todos los perceptores se hallan obligados con la parte de diezmos que en virtud de ella han de percibir, á cumplir con las obligaciones con que la reciben; y que siendo, como son, las encomiendas beneficios eclesiásticos, se hallan sujetos á las mismas cargas que los demás de esta naturaleza, hasta que logren los pueblos que por muerte de los actuales poseedores de ellas se cumplan los benéficos decretos de las Córtes y se extinga este origen de la miseria é infelicidad de los que la sufren, y no haya en la iglesia semejantes monstruosidades y anomalías, sino Prelados dignos y sábios y ministros celosos que administren los sacramentos y dén á los fieles el pasto espiritual, socorriéndolos y consolándolos en sus necesidades y cumpliendo con sus sagradas obligaciones.

El Sr. **CASTRILLO**: Ya que se ha tocado este asunto, no puedo menos de hacer presente á las Córtes que cuando yo en el año 15 recorrí, confirmando, los pueblos del campo de Calatrava, encontré varias iglesias de las órdenes, desprovistas de todo, de altares decentes, de vestuario y aun de cálices, habiendo capilla en el tránsito donde servia de mesa para el altar el arca de cebada. Esto precisamente depende de la desatencion del Gobierno respectivo, lo que me recuerda aquella cláusula de Macanaz en su testamento satírico de España, que dice: «Permito el Consejo de Ordenes entre los muchos desórdenes que tolero.» Concluyo, pues, con que las iglesias deben estar bien dotadas por los comendadores, puesto que éstos son los que perciben los diezmos.»

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el artículo fué aprobado. Lo fueron asimismo los siguientes 17 y 18.

En seguida dijo

El Sr. **DIAZ MORALES**: No puedo menos de extrañar el que la comision no haya presentado á la resolucion del Congreso una adicion que pasó á ella, firmada por mí y algunos otros Sres. Diputados, la cual se reducía á que se suprimiese del todo el diezmo de hortaliza que se cobra en algunas partes, como tambien el de frutas y legumbres. Esta adicion me parece digna de tomarse en consideracion, con tanta más razon, cuanto este diezmo no se cobra en todas las provincias ni pueblos. Quizá habrán dudado los señores de la comision de que el diezmo se extienda á tales especies en ningun punto; pero tengo en mi mano una exposicion acerca del particular, de la villa de Reus, en Cataluña, por la cual podrán convencerse, y que entre otras cosas dice así: «Esta villa tiene la recarga de obligarla al pago de rigoroso diezmo de verduras y hortalizas; de modo que aquí se paga de alcachofas, coles, nabos, pimentones, tomates, acelgas, lechugas, rábanos, chirivías, y para decirlo en una sola expresion, hasta de perejil se paga aquí diezmo, cosa que á algunos parecerá increíble.» Si la villa de Reus paga estos diezmos, los debe pagar toda la Nacion española; pero si no se paga en alguna de las demás provincias, tampoco debe pagarle la villa de Reus, pues no hay un motivo para que el perejil en

Madrid disfrute de una exencion que no se extienda allí. La exaccion de esta contribucion se hace de un modo el más gravoso y violento, como se verá por lo que dice la misma representacion: «El arrendador de este diezmo de verduras tiene la facultad de entrar en las huertas, aunque sean cerradas, circuidas de paredes y con puertas, primeramente para plantar una caña á cada diez banquillos, señalando uno para él y obligando al dueño del huerto á cultivárselo y regárselo como los nueve suyos, y despues todas y cuantas veces le da la gana, para ir á coger las plantas segun entran en sazon ó estado de usarse y comerse. Y no solo deben los propietarios permitir para esto la entrada al arrendatario de los diezmos, sino tambien á sus mozos ó jornaleros que quiera enviar para ello; de modo que en rigor no pueden los dueños ó propietarios llamarse dóninos absolutos de sus huertas, pues que no tienen un tal dominio, atendidas las facultades del arrendatario sobre ellas.» Todas estas razones, y otras mil que hay en su favor, prueban la justicia con que pedimos la abolicion de estos diezmos en la indicacion que pasó á la comision despues de admitida á discusion, y que por lo tanto no puedo menos de reclamar.

El Sr. **YANDIOLA**: La comision ha tenido presente la adicion que se reclama, y por cierto que le chocó, porque en ella se habla del diezmo de rábanos; pero no estaba en su arbitrio el proponer nada contrario á lo resuelto por las Córtes, que han determinado que se continúe pagando el medio diezmo de todas las especies que lo han pagado hasta aquí.

El Sr. **DIAZ MORALES**: Pues entonces, ó se debe generalizar este diezmo, ó todos los pueblos deben estar exentos de pagarle.

El Sr. **CUESTA**: El Sr. Diaz Morales debe tener entendido que la operacion que propone S. S. seria interminable; y por eso se ha dicho que se haya de cobrar en la misma forma y especies que hasta aquí.»

Al irse á leer otro dictámen de la misma comision, reclamó el Sr. *Vadillo* la discusion de una adicion suya al citado proyecto de decreto sobre diezmos, que la comision no adoptaba. Expusieron los Sres. *Secretarios* que si se entraba en la discusion de la adicion del Sr. *Vadillo*, los demás Sres. Diputados que habian hecho otras que tampoco adoptaba la comision, exigirian lo mismo, y se perderia un tiempo que reclamaban imperiosamente otros asuntos del mayor interés, como el de facilitar medios á la Tesorería, que se hallaba sin ellos. Insistió no obstante el Sr. *Vadillo*, fundado en que los autores de las adiciones tenian un derecho indisputable á exponer las razones en que apoyaban sus proposiciones, á cuyo derecho no queria renunciar. Contestóle el señor Conde de *Toreno* que ciertamente nadie podia disputar este derecho al Sr. *Vadillo*, pero que debia manifestar que la comision habia encontrado inconvenientes y dificultades en adoptar su adicion, que estaba reducida á que la autoridad civil tuviese parte ó intervencion en la Junta diocesana. Y el Sr. *Cuesta* añadió que á esto se habia provisto ya por un artículo que decia que la Junta deberá formar un reglamento y pasarlo á la aprobacion del Gobierno. Siguiéronse todavía nuevas contestaciones sobre esto, y para cortarlas se preguntó si se entraria en la discusion de las adiciones hechas que la comision no adoptaba; y las Córtes acordaron que no se entrase en esta discusion.

No obstante este acuerdo, todavía se reclamó la discusion de algunas de las adiciones; mas el Sr. *Presidente*, sosteniendo la resolucion del Congreso, dispuso que

se leyese, como se leyó, el siguiente dictámen de la misma comision:

«La comision especial de Hacienda presenta su dictámen sobre cada una de las adiciones é indicaciones que se hicieron al proyecto de decreto relativo á la contribucion territorial:

Del Sr. Cavaleri al art. 2.º

«No debiendo alterarse los contratos actualmente celebrados entre los propietarios de prédios rústicos y los colonos que los cultivan y disfrutan, y siendo estos por ahora solos los que reportan el beneficio de la reduccion del diezmo; «pido á las Córtes se sirvan declarar que entre tanto que duran los actuales contratos de arrendamiento, la contribucion directa que se cargue á la renta del prédio rústico se pague por mitad entre el propietario y el colono, pues aun así queda este último muy beneficiado y el primero muy recargado; pero que si el colono se allanase á pagar al propietario el medio diezmo en que se le alivia, pague el propietario toda la contribucion.»

La comision es de dictámen que el colono pague una cuarta parte de la contribucion, á no ser que quiera rescindir el contrato. En cuyo caso el art. 2.º del proyecto quedará redactado en estos términos: «Se impondrán tantos millones sobre las rentas y cánones de los prédios rústicos, y tantos sobre los urbanos.» En los que se hallaren arrendados satisfará el colono la cuarta parte de la contribucion que le corresponda, á no ser que quisiere rescindir el contrato.

Del Sr. Ramirez Cid al art. 6.º

«Que mediante haber aprobado las Córtes la base de diezmos para el repartimiento de la contribucion territorial, declaren las mismas que los precios y valores que rinden á beneficio de sus dueños las dehesas, pastos y montes, cuyas producciones naturales, no adeudando diezmo alguno, forman un verdadero producto de la propiedad territorial y con menos dispendio que el de las tierras de cultivo, estén sujetos y se tengan presentes para el cupo que deba repartirse á cada una de las provincias y á los pueblos.»

La comision considera la indicacion del Sr. Ramirez Cid comprendida en el artículo en que se incluyó el diezmo del ganado, para hacer el repartimiento entre las provincias; y en cuanto á los pueblos, las Diputaciones provinciales cuidarán de comprenderlos.

Del Sr. Marin Tauste al art. 7.º

«Que en atencion á que el valor de las casas de Madrid, Cádiz y Barcelona es doble al menos del valor que tienen las casas de las otras capitales de provincia, se calcule como doble el número de casas que tienen los pueblos expresados, en razon de estar en la proporcion de uno ó dos el valor de ellas respecto al que tienen las casas de las otras capitales.»

Habiéndose desechado por las Córtes el artículo á que se refiere esta indicacion, la comision propone por base para el repartimiento de la contribucion sobre casas un tanto por ciento sobre su renta líquida, cuya proporcion se aumentará ó disminuirá segun el resultado que diese el primer tercio.

Del Sr. Ledesma.

«Que se declare en alguno de los artículos 7.º ú 8.º

que las huertas, casas de campo, de recreo y jardines quedan sujetas á la contribucion territorial.»

La comision adopta la adicion del Sr. Ledesma.

Del Sr. Cepero al art. 10.

«Despues de la palabra *contribucion*, añádase: «mas no los edificios de esta clase, cuyo objeto es la elaboracion de los frutos de la heredad en que se hallen constituidos.»

La comision considera comprendida la indicacion del Sr. Cepero en el artículo á que se refiere.

Del Sr. Ramirez Cid al art. 11.

«Que la industria pecuaria sea comprendida en el repartimiento de la contribucion territorial, bien sea por el medio de patentes, ó por otro que se crea más conveniente.»

Esta adicion es contraria á lo aprobado ya por las Córtes en virtud de las razones que la comision expuso en la discusion.

Adicion del Sr. Traver.

«En la legislatura de 1822 se rectificarán los agravios que sufran las provincias en el repartimiento de la contribucion territorial de este año, distribuyendo entre las que resulten ahora más aliviadas el exceso que haya pesado sobre las otras.»

La comision cree justa la adicion del Sr. Traver, y desde luego conviene en que se ponga por artículo adicional del proyecto, que podrá ser despues del 11.

Otra del mismo Sr. Diputado.

«Que respecto á que el noveno se ha exigido siempre por obispados y no por provincias, y siendo aquel la única base que tiene el Gobierno para ejecutar lo que han aprobado las Córtes en el art. 6.º, deberá fijarse el total valor de los diezmos con relacion al número de parroquias que componen cada provincia.»

Esta adicion toca directamente á las atribuciones del Gobierno, el cual debe hacer el repartimiento y señalar las cuotas, pasándole á las Córtes para su aprobacion, en cuyo caso podrá tenerse presente la indicacion del Sr. Traver.

Del Sr. Carrasco al art. 6.º

«Que se suprima la palabra *pueblos*, á fin de que la base aprobada por las Córtes sirva únicamente para el repartimiento que se haga entre las provincias.»

La comision conviene en la supresion propuesta por el Sr. Carrasco.»

Aprobóse el dictámen de la comision con respecto á la adicion del Sr. Cavaleri sin discusion alguna.

Leido el dictámen respecto de la del Sr. Ramirez Cid al art. 6.º, dijo este Sr. Diputado que debia adoptarse su indicacion segun la habia presentado, y no en los términos en que la proponia la comision.

El Sr. SIERRA PAMBLEY: La comision admite esencialmente la adicion del Sr. Ramirez Cid, puesto que dice que esta especie de propiedad está sujeta á la contribucion territorial; pero no en los términos en que está concebida. Porque es preciso considerar dos cosas: una, el repartimiento de la cuota que señalen las Córtes entre las provincias; y otra, el que hace cada provincia de la parte que le toca. En el primer caso se ha

admitido para hacer este repartimiento el valor de los diezmos de cada provincia; ni se podía hacer otra cosa, porque el Gobierno no tiene más datos que ese: en el segundo, no se dice á las Diputaciones provinciales que se sujeten á la base adoptada por las Córtes, sino que preparen todos los datos que crean convenientes. Por consiguiente, está esencialmente admitida; pero admitirla literalmente sería lo mismo que decir que para el repartimiento general se tuviera presente el valor de esas fincas; y siendo la única base el diezmo, no podía hacerse más que agregar, como se ha hecho, el diezmo de los ganados al de los frutos de la tierra.»

Volvió á insistir el Sr. *Remirez Cid* en que se adoptasen los términos de su indicacion, para que se guardase la justicia.

El Sr. **SIERRA PAMBLEY**: La comision ha dicho y repite que no duda de la justicia de la indicacion; pero las reflexiones que acaba de hacer el Sr. *Remirez Cid* son contra lo resuelto por las Córtes, que han adoptado esta base, la cual no puede variarse: además de que la comision no conoce otro medio de reparar en parte esa injusticia, como ya he dicho, que agregar el diezmo de los ganados al de los frutos, ni el Sr. *Remirez Cid* lo presenta. Si se quiere admitir la adiccion tal como la hizo S. S., el Gobierno podrá tomar las noticias necesarias para hacer el repartimiento; pero entonces se hará éste para la legislatura del año 22, porque antes no podrá haber recogido todos los datos.»

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el dictámen fué aprobado.

Tambien se aprobó sin discusion el relativo á las adiciones del Sr. *Marin Tauste* al art. 7.º

Lo mismo se verificó respecto al de la del Sr. *Ledema* al mismo artículo y al 8.º

Leido el dictámen sobre la del Sr. *Cepero*, dijo

El Sr. **CEPERO**: El motivo que tuve para hacer esta adiccion, fué el parecerme que por no estar bastante claro el artículo, en el repartimiento de las contribuciones podian cometerse injusticias en los pueblos. En Andalucía es muy rara la hacienda de olivar ó viña que no tiene las máquinas de industria necesarias para la elaboracion de los frutos; y como el espíritu de la comision es que solo paguen cuando son una especie de industria pública, como los molinos que llaman *maquileros*, donde su muelen los granos de los que no tienen molino en su hacienda, creia necesaria alguna explicacion, para que no quedase al arbitrio de los ayuntamientos entender mal esta ley. En el territorio de Jerez, en que hay 500 ú 800 haciendas, apenas se encuentra una en que no haya lagar, viga de aceite, ó tahona para el pan de los trabajadores. Todas estas están comprendidas en la clase de máquinas de industria, y pudiera entenderse que estas heredades habian de pagar por dos partes. Así, me parece que podría explicarse más el art. 4.º, para que no quedase duda de que la industria recargada es la de los molinos para maquilar, esto es, la de aquella industria que se ejerce por especulacion, y no la que únicamente sirve para los frutos propios. Aunque la comision estime redundante la aclaracion que propongo, me parece que convendria hacerla.

El Sr. Conde de **TORENO**: La comision juzga que no se debe admitir la adiccion del Sr. *Cepero*, porque todos aquellos molinos que no producen renta alguna nada pagarán; pero hay muchos que tienen valor en renta, porque su dueño no es agricultor, los arrienda y le producen una renta, en cuyo caso deben pagar. Además, como se dice que la contribucion de las casas no recaerá

sino sobre los alquileres, es claro que no comprenderá á los molinos de que habla el Sr. *Cepero*. Así, la comision juzga la adiccion inútil ó perjudicial: inútil respecto de los que no producen renta, y perjudicial si se quiere hacer extensiva á los que la producen.»

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el dictámen de la comision fué aprobado.

Leido el correspondiente á la adiccion del Sr. *Remirez Cid* al art. 11, manifestó este Sr. Diputado que habia hecho la adiccion antes de tiempo, y que puesto que estaba en contradiccion con lo acordado por las Córtes, desistia de ella. En efecto, no se tomó resolucion alguna.

Leido el dictámen de la comision acerca de la del Sr. *Traver*, dijo

El Sr. **MORAGUES**: Tengo por absolutamente imposible el que en la legislatura que viene pueda verificarse con justicia la indemnizacion que quiere el señor *Traver* y la comision apoya; y además tengo por impolítico el que se dé lugar á tratarse de semejante cosa. Es imposible que la indemnizacion y resarcimiento pueda hacerse con equidad y justicia, pues para ello sería necesario indagar, no solo el más ó menos diezmo pagado en las respectivas provincias, sino todo lo demás que pueda influir é influye con efecto en el aumento y disminucion de su verdadera riqueza territorial. Porque una provincia, por ejemplo, que en razon de pagar poco diezmo, y del modo de pagarlo, pueda á primera vista aparecer que resulta ahora beneficiada, y que en el año que viene tenga que resarcir por otras, si se hiciese un formal escrutinio de su verdadera riqueza, teniendo en consideracion, como es debido, cuantas desventajas puedan por otro lado concurrir en ella con respecto á las demás provincias, así por su localidad y particulares circunstancias, como por los mayores gastos que tenga que hacer con motivo de la ingratitud de su suelo, en el que sea necesario expender grandes y continuas sumas para hacerle dar una módica cantidad de frutos, al paso que en otras provincias casi sin expensa alguna los dan las tierras en abundancia, como por infinitos otros motivos, el verdadero resultado vendria á ser que si bien por un lado apareciese beneficiada y con mayor riqueza de la que ahora se le calcula, por otro se veria que todavía era menor en proporcion á las demás provincias que se presentaban á primera vista perjudicadas. Para hacer, pues, con justicia el resarcimiento que el Sr. *Traver* quiere, es necesario buscar bajo todos sus aspectos y puntos de vista la verdadera riqueza territorial de cada provincia; en una palabra, tener su estadística con exactitud, porque de otra manera nunca la podrá haber en el resarcimiento: y yo me opongo á que se haga de otro modo, con tanto más fundamento, cuanto que á mi provincia ninguna parte de culpa se le puede atribuir en la dura necesidad de haber tenido que adoptar una base desigual é inexacta, porque no solo su Diputacion tiene formada y documentada su estadística, sino que se hizo además allí de orden del Gobierno y por agentes del mismo, con crecidos gastos de los pueblos, el apeo y aprecio general de propiedades en cumplimiento de la Real orden de 18 de Febrero de 1818. ¿Y no será poner en guerra á las provincias unas con otras, el dar lugar á que sin datos ni conocimientos exactos puedan suscitarse las inmensas pretensiones, dudas y disputas que no podrán menos de suscitarse si se aprueba el dictámen de la comision? Y aun cuando estas pudiesen discernirse y discutirse con conocimiento, ¿no sería primero indemnizar y resarcir la horrorosa desigualdad que hubo en el repartimiento de la contribucion directa decretada

en el año 13, que unas provincias pagaron y otras no, y que en alguna, como sucedió en la mia, la cuota de la contribucion, al tenor del censo tomado por base, excedia al todo de la cosecha en un ramo de la mayor consideracion en la riqueza de aquella isla, cual es el aceite?... Me opongo, pues, á la indicacion del Sr. Traver y al dictámen de la comision, porque es imposible que el resarcimiento se haga con equidad y justicia, y porque considero impolítico el dar lugar á que se trate de semejante cosa.»

El Sr. Conde de *Toreno* contestó que precisamente el espíritu de la indicacion era el mismo que deseaba el señor Moragües; porque estaba muy claro que si los datos que se debieran tener presentes para la reclamacion de perjuicios que se proponia, fueran solamente los de la base adoptada, resultarían los mismos perjuicios que hasta aquí, pues dichos datos existían ya en el Gobierno, y el mismo resultado darian en este año que en el siguiente para rectificar el repartimiento; y por consiguiente, lo que ahora se queria era que se presentasen todos los demás necesarios y posibles para hacer en lo sucesivo el repartimiento, evitando los inconvenientes de la base actual: por lo que se veía que efectivamente la adición iba dirigida á lo que pretendía el Sr. Moragües, y así parecía muy extraño que este Sr. Diputado impugnase lo mismo que queria y deseaba.

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el dictámen de la comision fué aprobado en esta parte.

Leyóse el respectivo á la segunda adición del mismo Sr. Diputado; y leído, hizo éste la observacion de que cobrándose el noveno, que era la base acordada, por diócesis y no por provincias, y habiendo en una misma provincia diferentes diócesis, era preciso que supiera el Gobierno fijamente la intencion de las Córtes, puesto que la resolucion de éstas debía ser la regla á que aquel tendria que atenerse; por lo que le pareció que estaba muy en su lugar la indicacion, y que debía incluirse entre los artículos del decreto.

Contestó el Sr. *Calderon* que la comision habia creído que se daba ya una regla fija al Gobierno, diciéndole que tuviera presente el diezmo de cada provincia para el repartimiento: que tomándose por base el noveno, ya sabía el Gobierno que se cobraba por obispados, y que por consecuencia debería calcular con esta prevencion lo que diezmasse cada provincia; operacion fácil en averiguando lo que pagase cada uno de los pueblos de ella, aunque perteneciesen á distintos obispados; pero que de todos modos no veía inconveniente, ni creía que los demás individuos de la comision le tendrían en que se explicara esto con la claridad que el Sr. Traver deseaba.

Creuyendo el Sr. *Rey* que se decía que debía arreglarse la base al número de parroquias, manifestó que no estando éstas en proporcion con la riqueza ni con la poblacion de las provincias, resultaría una grande injusticia, pues saldria más beneficiada la provincia que menos parroquias tuviese.

Hízole observar el Sr. *Calderon* la equivocacion que en ello padecía, pues la base era el producto de los diezmos de los pueblos de cada provincia, sin atender ni entrar en cuenta el número de parroquias, sino el valor de lo que pagaba por diezmos cada pueblo.

Repuso el Sr. *Sancho* que en su concepto la adición estaba reducida á que se tomara por base el número de parroquias; porque habiendo diócesis que pertenecían á tres provincias, el Sr. Traver deseaba que se diese una regla general para saber qué parte de la diócesis correspondía á cada provincia; y supuesto que el valor de los

diezmos, que se decía, no era más que de la totalidad, preguntaba qué otra regla se podia dar al Gobierno, como queria el Sr. Traver.

Contestó el Sr. *Calderon* que en averiguando el producto de los diezmos de cada una de las parroquias de la provincia, se tendria el de los de toda la provincia, y por consiguiente la base apetecida; y que en esto se veía claramente que no era el número de parroquias, sino el valor de los diezmos de las de cada provincia, el que debía tenerse presente para el repartimiento.

Observó el Sr. *Sancho* que esto era lo que no se sabía; y entonces dijo el Sr. *Sierra Pambley* que las observaciones del Sr. Sancho caminaban bajo el supuesto de que el Gobierno ignoraba el valor de los diezmos de cada parroquia, lo cual no lo decía la comision; porque lo que ésta habia dicho era únicamente que no se sabía el valor de las fincas que no diezmasaban, pero no que no se supiese el valor de los diezmos de cada parroquia; pues efectivamente el Gobierno tenia noticia de él, porque los administradores del noveno y demás rentas decimales justificaban sus cargos por las tazas, las cuales no eran otra cosa que el valor de los diezmos de cada parroquia.

El Sr. *Ezpeleta*, reproduciendo las contestaciones del Sr. Calderon, opinó, con arreglo á ellas, que no habia dificultad en saber el valor de los diezmos de cada provincia.

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el dictámen fué aprobado. Tambien lo fué el respectivo á la adición del Sr. Carrasco al art. 6.º

Después de lo cual, dijo el Sr. *Traver* que echaba de menos en el art. 6.º del decreto sobre contribucion territorial una cosa que se habia insinuado en la discusion, á saber: que aprobada la base del valor de los diezmos, no se decía cómo se habia de calcular esta base; lo cual podria hacerse del modo que se habia indicado en la discusion, y se habia hecho para la indemnizacion de los perceptores de diezmos secularizados, esto es, fijando dos quinquenios, uno anterior al año de 8 y otro desde el año 16.

Habiendo contestado los Sres. *Yandiola* y Conde de *Toreno* que habia sido un olvido de la comision por no haberse propuesto por escrito en la discusion, pero que se expresaria al tiempo de redactar el proyecto, pasó el Sr. Traver á la mesa á formalizar una indicacion sobre el particular.

Mientras el Sr. Traver la escribía, se leyó la siguiente del Sr. *Remirez Cid* al art. 2.º del núm. 3.º sobre la contribucion de patentes:

«Pido á las Córtes aumenten el derecho de cada título de patentes hasta la cantidad de 1.500 rs. por lo menos en el máximum, y proporcionalmente en los demás hasta el mínimum;» sobre la cual opinaba la comision que podria aumentarse en un tercio cada cuota de las tarifas que acompañaban al proyecto de decreto de patentes.

Leído este dictámen, dijo el mismo Sr. *Remirez Cid*, entre otras cosas, que en tiempo del Gobierno intruso se habian recargado las patentes hasta 25.000 rs., como habia visto por los diarios de aquella época, y no hasta solos 2.000, como habia dicho uno de los señores de la comision en la discusion del decreto de patentes.

Contestó el Sr. Conde de *Toreno* que la comision no debía haber propuesto aumento alguno, pues ya estaban aprobadas las tarifas por las Córtes, y que por una mera condescendencia proponía que se aumentasen en un tercio: que la comision creía que estaba ya bastante car-

gada esta contribucion, tanto por ser nueva, cuanto por que las clases sujetas á ella pagaban además otras de que estaba exenta del todo ó casi del todo la clase sujeta á la contribucion territorial: que se calculaban en 40 millones los productos de la contribucion de patentes, aunque por no hacer cálculos aventurados los habia fijado la comision en 30; pero que creia tambien que el modo de hacer aumentar estos valores no consistia en aumentar mucho las tarifas, sino en todo lo contrario.

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el dictámen de la comision fué aprobado.

En seguida presentó el Sr. Traver su adiccion al artículo 6.º en estos términos: «calculado por el último quinquenio y el que finalizó en 1808.»

Leida esta adiccion, advirtió el Sr. *Obispo de Mallorca* que estaban mandados excluir los años de 1803 y 1804 de todos los quinquenios y cálculos que se hiciesen sobre los productos de aquellos años, por el excesivo y extraordinario precio que tuvieron los granos. A esto añadió el Sr. *Calderon* que habia otras muchas razones, además de la expuesta por el Sr. Obispo de Mallorca, como era, por ejemplo, la variacion extraordinaria que habia tenido la riqueza territorial desde el año 1808 hasta el presente, de la que habia resultado ganar unos pueblos y empobrecer otros; por lo cual, si se adoptase como base el quinquenio anterior al año de 8, en vez de la igualdad que se deseaba, resultaria una desigualdad extraordinariamente mayor; y así, juzgó más oportuno se tomase únicamente el último quinquenio terminado en el año de 1820. Confirmó esto mismo el Sr. *La-Santa*, recordando el excesivo precio á que se vendió en Madrid el artículo del pan. El Sr. Conde de *Toreno* observó que este punto se hallaba ya decidido por las Córtes, y creyó en su consecuencia que no podia tener lugar, ni venia tampoco al caso. Siguiéronse algunas otras ligeras contestaciones sobre este punto; el cual declarado suficientemente discutido, y habiéndose procedido á su votacion, quedó aprobada la primera parte de la adiccion, y desechada la segunda.

El Sr. *La-Santa* pidió al Sr. Presidente le permitiese, en el momento en que lo tuviese por conveniente, el exponer las razones que le habian movido á hacer una adiccion que la comision no habia tenido á bien adoptar. El Sr. *Presidente* le contestó que así lo haria cuando hubiese oportunidad.

Aprobóse tambien el dictámen de la comision acerca de la adiccion del Sr. Lobato á los artículos del proyecto número 4.º, sobre *consumos*, y especialmente al art. 5.º, la cual estaba concebida en estos términos:

«En donde dice: «no comprenderán en ellos las propiedades sujetas á la contribucion directa territorial, ni las casas,» añádase: «ni los diezmos, mientras estén gravados con la contribucion directa de los 3 millones impuesta en el art. 15 del núm. 1.º»

Acerca de esta adiccion decia la comision:

«El artículo se pondrá como está, y se añadirá: «ni las rentas decimales mientras permanezcan gravadas con los 30 millones de reales anuales.»

En seguida se procedió á la discusion del dictámen de la misma comision acerca de las adiciones hechas al proyecto de decreto relativo al tabaco y sal, el cual fué aprobado en todas sus partes, y es como sigue:

«La comision especial de Hacienda presenta su dictámen sobre cada una de las adiciones é indicaciones

que se han hecho al proyecto de decreto relativo al tabaco y sal.

Adiccion del Sr. Ezpeleta al art. 9.º

«Teniendo entendido haberse establecido en la ciudad de San Sebastian de Guipúzcoa una fábrica de tabacos, y respecto á que el art. 9.º dice que se establecerá una en Santander ó Provincias Vascongadas, pido que se añada: «prefiriendo la de cualquier particular que se halle establecida.»

La comision opina que debe dejarse enteramente al arbitrio del Gobierno, mayormente cuando éste tratará de tomar á precios convencionales los efectos de particulares, segun otra indicacion que sigue á continuacion.»

Del Sr. Romero Alpuente al mismo artículo.

«Que se añada en el art. 9.º: «sin perjuicio de que el Gobierno compre, arriende ó contrate con las fábricas de particulares, y adquiera sus existencias; y no pudiendo convenirse, se arregle el punto de las fábricas por medio de hombres buenos, como lo previene la Constitucion; y en cuanto á las existencias, sea permitida libremente su venta hasta el último dia del próximo Diciembre.»

La comision adopta literalmente la primera parte de la adiccion del Sr. Romero Alpuente; pero no puede convenir en la segunda, de que se permita á los particulares la venta de sus tabacos hasta Diciembre, pues esto dilataria la plantificacion del plan, con perjuicio de la Hacienda pública.

Indicacion del Sr. Rovira.

«Que las Córtes se sirvan resolver sobre la suerte de los comerciantes, que habiendo hecho especulaciones sobre tabacos en razon de la libertad de su comercio, reciban sus pedidos despues de restablecido el estanco de este género.»

La comision opina que tanto los tabacos que llegaren á los puertos de depósito, como los demás existentes, pertenecientes á particulares, debe comprarlos la Hacienda pública á precios convencionales, graduándose á juicio de hombres buenos, en caso de no convenir, lo mismo que queda dicho en cuanto á las fábricas.»

Del Sr. Urruela.

«Pido que las partidas de tabaco elaborado y en hoja, viniendo de las provincias de Ultramar en el término de cuatro meses y en buques nacionales ó extranjeros con permiso, no queden sujetas á los artículos del nuevo decreto, por ser contrario al 1.º del de 9 de Noviembre y al 4.º de la Constitucion.»

Esta indicacion está contestada en la anterior del Sr. Rovira, debiéndose únicamente dejar al arbitrio del Gobierno el señalamiento de los plazos para los tabacos de que trata este artículo y el anterior.

Del Sr. Zapata al art. 15 sobre sal.

«Que el exceso solo se satisfará de las fanegas que ni hayan consumido ni presenten existentes en la visita.»

La comision adopta la adiccion del Sr. Zapata al artículo 15 aprobado.

Del Sr. Echeverría.

«Que los Córtes tengan á bien desestancar y permitir el comercio libre del ramo de orchilla en las islas Canarias, así en las que hasta ahora se han apellidado de señorío, respecto á hallarse ya abolido este privilegio exclusivo de los denominados señores por el decreto de 6 de Agosto de 1811, como en las otras tres mayores que siempre han pertenecido á la Nación, por no ser conforme á los principios de justicia semejante reprobado monopolio á costa de la sangre de aquellos habitantes.»

La comision tiene noticia de haberse verificado el desestanco de la orchilla en las islas Canarias por el Gobierno, y no encuentra inconveniente en que las Córtes lo ratifiquen.

Del Sr. Banqueri.

«Que todo capitán de buque menor de 80 toneladas, que se hallare en las cuatro leguas de la costa con tabaco, sal ó género de ilícito comercio, pierda el género, la carga y el buque.»

La comision, mirando esta medida como reglamentaria, cree que corresponde al Gobierno.

Del mismo Sr. Diputado.

«Que se suprima el privilegio de ocho dias para la mejora del manifiesto que gozan en nuestros puertos las banderas inglesa, francesa, holandesa, austriaca y dinamarquesa, pues á la sombra de dicho privilegio son incalculables los perjuicios que sufren el Erario, el comercio de buena fé y las fábricas nacionales.»

La comision considera necesario que el Gobierno informe sobre esta indicacion antes de dar su dictámen.»

La misma comision presentó tambien los siguientes artículos adicionales al decreto sobre el derecho de registro, los cuales debian colocarse despues del art. 61:

«Además de la nota prescrita en el artículo anterior, los escribanos exhibirán en los primeros dias de cada uno de los meses de Febrero, Abril, Julio y Octubre sus protocolos á los registradores del partido.

Los escribanos de diligencias llevarán libro de todas las que practicaren en su ministerio que devenguen derechos de registro, bajo la multa de 20 rs. vn. por cada omision.

Los escribanos de los juzgados los llevarán tambien de todos los actos, sentencias y autos que segun el presente decreto deben registrarse.

Los registradores visarán los protocolos, expresando en sus vistos buenos el número de actos inscritos. Las cartas de pago que dieren los registradores se unirán al acto registrado.

Los registradores expresarán en ellas con todas las letras la fecha del registro y su fóllo, con el número y suma de los derechos percibidos.

Cuando el acto contenga muchas disposiciones y cada una de ellas devengue un derecho particular, los registradores las indicarán sumariamente en sus cartas de pago, expresando en ellas por separado la cantidad de cada derecho percibido, bajo la multa de 40 rs. por cada omision.»

El primero de estos artículos adicionales fué aprobado sin discusion.

Leido el segundo, observó el Sr. Traver que convendria sustituir la palabra libro á la de protocolo, que en este caso no era exacta; y la comision convino en es-

ta alteracion. Despues de esto añadió que los escribanos de diligencias eran unos meros encargados de los escribanos de cámara de los tribunales principales, y que no á aquellos, sino á estos, era á quienes debia hacerse llevar el libro ó nota para hacer efectivo el pago de esta contribucion.

Opinó el Sr. Freire que el modo más fácil y sencillo de cobrar estos derechos seria imponerlos en el papel sellado, dando á éste el diverso precio que debian pagar los distintos actos judiciales que se sujetan al derecho; de suerte que el acto que debiese pagar 4 rs., por ejemplo, se hubiese de escribir en papel de 4 rs.; si 10, de 10, etc., con lo cual toda la cuenta y averiguacion estaba reducida á saber la expencion del papel.

Contestó el Sr. Calderon que las Córtes habian ya determinado que esta contribucion se pagase por este medio, y que no se debia retroceder: que en cuanto á lo que proponia el Sr. Traver, era necesario tener presente que los escribanos de partido no tenian, como los de cámara de las Audiencias, otros escribanos para diligencias, y que por el método propuesto se evitaba el fraude, puesto que por las notas del libro podria cotejarse si se habian exigido los derechos correspondientes.

El Sr. Castanedo opuso que se expresase si los escribanos habian de llevar algunos derechos por hacer el asiento en los libros, para evitar de este modo los abusos que podrian cometerse, y aumentar esta contribucion con lo que quisiese exigir el escribano.

Contestóle el Sr. Calderon, que habia un artículo en que estaba expresamente dispuesto que no llevasen más derechos que los de arancel.

Expuso el Sr. Calatrava que no solo no era posible obligar á los escribanos á llevar de oficio este asiento, sino que aun cuando le llevasen, no podia servir para la comprobacion ni para asegurar los intereses. «No se prevé, dijo, lo trabajoso que será para todos los escribanos llevar este asiento: necesariamente será muy prolijo, y no creo que las Córtes tengan un derecho á imponerles esta carga sin permitirles el reintegro. ¿Qué sueldo les paga la Nacion para cargarles con esta obligacion? ¿Y qué resultados tendrá el que hagan esto violentamente? Es indispensable que hombres que no tienen otro modo de vivir, se reintegren. ¿Y á costa de quién? Del infeliz, al cual se ha exigido ya el derecho de registro. Supóngase además que los contribuyentes pagan su registro: ¿qué comprobacion dan esas listas? En la discusion anterior indiqué lo que acaba de decir el Sr. Freire, con el objeto de que entrase en el Erario todo lo que pagan los contribuyentes, y no quedase gran parte en manos de los que lo recaudan. La única comprobacion que pueden tener los escribanos son los procesos. ¿Y dónde estarán estos procesos originales al tiempo de hacer la visita? Unos en poder del escribano, otros en poder del fiscal, otros en poder del abogado, otros en poder del juez, otros en apelacion á la Audiencia, otros en el Tribunal Supremo de Justicia, y otros en otras partes. ¿Cómo, pues, se hará esta confrontacion? ¿Deberá quedar á la buena fé del escribano? Entonces se da lugar á que, no solo cobren lo que deben, sino mucho más: con lo cual harán odiosa la contribucion y el sistema constitucional.»

Contestó el Sr. Conde de Toreno que de quien menos esperaba que fuese atacado el artículo, era del señor Calatrava: que las observaciones que en la anterior discusion habia hecho presentes se habian reducido á dos: una sobre el modo de establecer este impuesto, á que la comision no accedió, porque creia que así se separaba

del objeto que se habia propuesto; y la otra dirigida á evitar las dificultades que pudieran ocurrir para hacer la comprobacion del pago del derecho; y en virtud de estas observaciones la comision presentaba estos artículos adicionales: que el sistema habia provisto á todo, pues además de los registradores, habia visitadores para examinar si se cumplia con lo mandado: que era cierto que á los escribanos se les aumentaria el trabajo, pero no seria tanto que exigiese de justicia una recompensa; y si acaso no querian hacerlo, que dejasen de serlo. «Se dice, añadió, que podrá haber fraudes y hacerse odioso el sistema. Si los escribanos y los jueces se empeñan en hacerlo, no solo éste, sino otros muchos medios tendrán para conseguirlo; pero no por esta causa se ha de privar la Nacion de esta contribucion. A las Córtes extraordinarias les pareció la mejor que pudiera haber la directa, la cual se estableció con el mayor aplauso, y esta contribucion fué la que echó abajo el sistema en el año 14. Además se publicarán tarifas, y los contribuyentes sabrán lo que deben pagar; y si los jueces y escribanos exigen más de lo que deben, no será la causa la contribucion de registro, sino el abuso que hagan de su empleo los encargados de su recaudacion.»

Repuso el Sr. *Calatrava* que el Sr. Conde de *Torena* se equivocaba en dos cosas: la primera en creer que para la comprobacion fuese bastante que además de los registradores hubiese los visitadores. «¿Cómo podrá hacerse, dijo, la comprobacion para estos empleados, aun cuando haya uno de cada pueblo, sin tener á la vista los procesos originales, lo cual la mayor parte de las veces será imposible, como he dicho anteriormente? Cuando hablé en aquella discusion, propuse otro medio que podia evitar estas dificultades, y era que en el acto de sentenciarse las causas se exhibiesen los documentos sujetos á registro, y recibo de haberlos satisfecho, haciendo responsable al juez que sentenciase sin este requisito. La otra equivocacion es haber dado á entender que me oponia á esta contribucion. No, Señor; á lo que me opongo es al modo de exigirla, porque en mi opinion debia adoptarse otro medio que, produciendo mucho más, fuese menos gravoso é incómodo á los contribuyentes.»

Ayudó el Sr. *Cano Manuel* las razones del Sr. *Calatrava*, no en cuanto al papel sellado, aunque manifestó convenir en que este seria el medio más sencillo de exigir esta contribucion de registros, sino con respecto á las otras observaciones. Añadió que no debia fiarse la cobranza á los escribanos, porque de aquí adelante, tanto en los tribunales superiores como en los inferiores debia haber un repartidor, que es la primera persona por donde deben pasar los actos judiciales, el cual debia hacerse cobro de los derechos correspondientes á ellos, sin la intervencion del escribano ni de otro algun dependiente del tribunal: que en el Código civil se habia dispuesto así, en consideracion á que teniendo los agentes subalternos del tribunal, como escribanos y procuradores, un contacto inmediato con los litigantes, era menester evitar los grandes abusos que hasta ahora se han cometido, y por lo mismo se queria que no tuviesen relacion con ellos ni aun para percibir sus derechos; y que en el mismo Código se adoptaba el medio de formar una oficina donde se entregasen aquellos derechos, y donde despues se repartiessen proporcionalmente á los abogados, escribanos y procuradores. «El mismo Código, dijo, con presencia de los males que ha causado el que los escribanos tengan siempre en su poder todas las actas judiciales, ha propuesto otro medio

legal, y es: que despues de concluido un proceso, se haya de presentar al ayuntamiento del pueblo, que tendrá un archivo donde todos los de esta clase se custodiarán. El ayuntamiento no recibirá estos procesos sin que conste por una relacion que lleven, que los derechos de registro han sido satisfechos. De este modo se pueden evitar todas las dificultades, y al mismo tiempo que se ahorrarian muchas diligencias, se evitaria el entorpecimiento que deberian sufrir las causas para examinar si se habian pagado ó no estos derechos.»

Observó el Sr. *Yandiola* que al Sr. *Calatrava* le parecian insuficientes los medios propuestos para evitar los fraudes que pudieran cometerse, al paso que el señor *Cano Manuel* creia que con menos podria asegurarse el cobro de los derechos y evitarse aquellos fraudes; y que esta contradiccion procedia de que no se ponian en el verdadero punto de vista para mirar la cuestion como era en sí: que la comision en la discusion del proyecto habia expresado las causas que habia tenido para no adoptar el medio del papel sellado, que era porque no llenaba el objeto que la comision se habia propuesto, el cual, no solo se dirigia á exigir una contribucion, sino á tener una noticia exacta de las transacciones que se hicieran para poder perfeccionar la estadística; y tambien porque cuantas más precauciones se tomasen, más seguridad se daba. «Se presenta esto, añadió, por algunos señores bajo el concepto de impracticable, y toda la operacion está reducida á añadir una diligencia, pues en todas las capitales hay un oficio de hipotecas en donde se exigia un derecho muy semejante á este; no haciéndose ahora más que extender esta contribucion á todos los ramos de la administracion de justicia. Además, los escribanos están acompañados de los registradores, que deben cuidar del pago de todos los actos judiciales sujetos al registro, y son dos las personas que deben llevar una razon exacta de estos actos. El registrador tambien está sujeto á dar noticia en los diez primeros dias de cada mes de los actos de que ha tomado razon, y el escribano tiene que hacer lo mismo. El visitador no ha de visitar sin documentos, que serán los expresados, adquiridos anteriormente; pues aunque todos los expedientes no estén en poder del escribano por haber pasado á la Audiencia, etc., donde quiera que vayan habrá registro y visitadores. Yo no oí en la anterior discusion al señor *Calatrava*, y ahora convengo en que seria oportunísimo adoptar la medida que ha propuesto, reducida á que se obligase á presentar en el acto de la sentencia el recibo del registrador de haberse pagado la contribucion. En cuanto á lo que ha dicho el Sr. *Cano Manuel*, debo hacer presente que la comision ha procurado dividir la responsabilidad para asegurar mejor el derecho. La comision cree que con estos artículos que ahora propone, y con la adiccion del Sr. *Calatrava*, queda conseguido el objeto que las Córtes pueden proponerse.»

Advirtió el Sr. Conde de *Toreno* que estaba ya prevenido así por el art. 73, el cual lo leyó. Entonces replicó el Sr. *Diaz del Moral* que hay autos que no se sentencian y otros que duran años y más años, y sobre los cuales suele al fin no recaer resolucion. Y el Sr. Conde de *Toreno* contestó que para eso decia el artículo «admitir en juicio;» á lo cual replicó el Sr. *Diaz del Moral* que por este acto empezaban los juicios; y el Sr. *Cuesta* respondió que para esto se ponian los registradores.

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el artículo fué aprobado, como lo fueron todos los restantes, sin más discusion.

La misma comision presentó tambien su dictámen acerca de las adiciones hechas al decreto núm. 6.º, que trata del derecho proporcional, cuyo dictámen decia así:

«La comision especial de Hacienda ha examinado las adiciones hechas al decreto núm. 6.º del sistema general de Hacienda, y presenta su dictámen á las Córtes del modo siguiente:

Del Sr. Echeverría.

Aprobada su adicion, el art. 4.º de la nota 8.ª quedará así:

«Las cartas de pago, reembolsos ó reducciones, de cualquiera especie que sean; los retractos de los bienes de abolengo ó convencionales; los de dominio directo, superficiario y comunal, por autos públicos en los términos, ejecutados bajo firma privada, y presentados al registro antes del cumplimiento de estos términos, y los demás actos ó escrituras que contengan descargo de firmas ó valores de cosas muebles.»

Del Sr. Corominas.

Añádase un artículo, que será el 3.º del núm. 8.º, concebido en estos términos:

«Los vales á la orden y demás obligaciones negociables de esta naturaleza, podrán no presentarse al registro, sino con los protextos que se hubieren hecho de ellas.»

Del Sr. Sancho.

Propone que el derecho proporcional del registro sea de 10 por 100 en las ventas del Crédito público. No puede admitirse esta adicion, porque de ella resultaria que, segun el valor actual del papel, las posturas se harian, ó por la mitad del precio de tasa ó por la mitad del valor que los postores estuviesen dispuestos á dar. Un ejemplo demuestra esta verdad.

Una finca tasada en un millon de reales á papel, valdrá en metálico, segun el valor que el papel tiene, 200.000 rs. Si el comprador, pues, hubiere de pagar el 10 por 100 ó 100.000 rs. en metálico, ofreceria solo 500.000 rs. de papel, y el resultado seria que las fincas del Crédito público solo absorberian un valor de la Duda pública igual á la mitad del precio de sus tasas.

La comision, pues, limita este derecho proporcional al 4 por 100 de la tasacion de las fincas.

Del Sr. Rey.

Por su adicion resulta el artículo en estos términos:

«45. Los testamentos serán registrados en el término de un mes, contado desde el fallecimiento del testador, si fuere en la capital, y dos meses si aconteciese en algun pueblo del partido. Los testamentos cerrados no serán en el término de un mes, contado desde su apertura y publicacion.»

«46. Dentro de dos meses, contados desde dicho fallecimiento, «y en los testamentos cerrados, desde su publicacion,» presentarán los herederos, legatarios ó testamentarios una relacion de todos los bienes que hubiere dejado el testador: si se hiciera inventario judicial, tendrán para presentarlo el término de quince dias despues de concluido.»

En este artículo desea el Sr. Rey que se suprima la palabra *legatarios*. Pero obsérvese que está puesta con todo cuidado; porque estando el legatario obligado á

pagar el derecho que corresponda á su legado, es forzosa su relacion ó declaracion, para que la administracion pueda exigírselo.

Del Sr. Verdú.

Añadiendo la palabra que este señor propone al artículo 53, quedará concebido en estos términos:

«Los escribanos y notarios presentarán, para ser registrados, todos los actos que pasaren ante ellos y los autos judiciales que pasen por su testimonio; y como responsables al pago de los derechos de registro, cuidarán de exigirlo de las partes. Por esta diligencia, que se considera como de oficio, no llevará derechos.»

Del Sr. Rey.

Por su adicion al art. 2.º de la nota 12, dirá aquel:

«Los arrendamientos de bienes inmuebles y derechos por tiempo limitado ó por vida.»

Del Sr. La-Llave.

En virtud de la indicacion de este señor, el art. 28 quedará concebido en estos términos:

«Las rentas y pensiones que en virtud de estipulacion hayan de pagarse en especies, se valuarán por una tarifa que se dará en cada cabeza de partido, «y registrá en los pueblos de sus territorios.»

Del Sr. Carrasco.

Su adicion corresponde al art. 2.º de la nota número 8.ª, y no al 30 de la nota núm. 1.ª, porque trata de las obligaciones producidas por préstamos entre particulares, y segun el art. 4.º las obligaciones están sujetas al derecho proporcional.

Pide el Sr. Diputado que los préstamos entre particulares se exceptúen de todo derecho. La comision juzga que siempre que el préstamo no produzca obligacion negociable por endosos ó en otra forma, no está comprendido en el art. 2.º de la nota 8.ª; pero si la suposicion fuere de un préstamo negociable, la comision ha evitado todos los inconvenientes con la adicion que ha puesto al artículo núm. 2.º en virtud de la del señor Corominas.

Del Sr. Vadillo.

Propone este señor que en las obligaciones dadas á papel, cuyos derechos de registro han de satisfacerse en metálico, segun dispone el art. 35, se rebaje para su pago el quebranto que el papel tuviere. Esta adicion la juzga inútil la comision; porque ó en la obligacion se expresó la pérdida ó descuento del papel, ó se omitió esta circunstancia: en el primer caso ha de estimarse la obligacion como si hubiese sido hecha en metálico, y en el segundo no puede dudarse que el valor nominal del papel fué el que las partes contratantes dieron al objeto de la obligacion. A nadie se oculta que la administracion no procedia juiciosamente dando al papel una rebaja que las partes contratantes no le hicieron.

Del Sr. Urruela.

La comision conviene en que en el art. 1.º del decreto, en lugar de «Reino,» se ponga «Península é islas adyacentes.» El artículo, pues, dirá:

«Se establece un registro público que comprenderá la Península é islas adyacentes.»

Las demás adiciones del Sr. Diputado no las cree necesarias la comision.

La comision solo dirá que en la especie de obligaciones de que el Sr. Diputado habla, y ella no entiende, deberán intervenir actos públicos, ó bajo firma particular. En ambas suposiciones no hay sigilo: y si este fuese tal que ninguna especie de acto hubiese intervenido, no podrán entonces registrarse los que no existen.

En cuanto á los libros de cuentas corrientes y los demás que debe llevar un comerciante, jamás se han comprendido éstos bajo de la denominacion de actos civiles, judiciales ó extrajudiciales.»

Leído este dictámen, se procedió á su discusion, y fué aprobado en cuanto á las adiciones de los Sres. Echeverría y Corominas. Leida la parte relativa á la del señor Sancho, dijo este Sr. Diputado que no podia menos de proceder equivocadamente la comision, y añadió:

«La equivocacion está en que se confunde el *justiprecio* con el *remate*, y son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo he de pedir yo que se pague el 10 por 100 del remate, cuando éste es en papel y pido se pague en dinero? En mi cabeza no podia entrar ese desatino. He dicho *justiprecio*, porque se usa tambien de esta voz en lugar de la de *tasa*. Si hay otras razones, díganse y contestaré: si no las hay, debe aprobarse mi adicion; porque la demostracion que presenta la comision es la más extraordinaria del mundo. Propongo que paguen los compradores de fincas el 10 por 100 del precio de la tasacion, y dice la comision que no puede ser, porque resultará que pagarán la mitad. Suplico al Sr. Secretario vuelva á leer el dictámen de la comision. (Se leyó, y continuó el orador:)

¿Quién ha dicho que el *justiprecio* se hace en papel? Se hace del valor que tiene la finca en sí y á efectivo, como todas las cosas, y luego la postura es en papel y sube mucho. Así, esa demostracion de la comision es falsa. Yo digo que se haya de pagar en lugar del 4 un 10 por 100, y lo único que resultará será que se venderán estas fincas por la décima parte menos; pero decir que se venderán por la mitad, no sé de dónde lo saca la comision. Y si no hay otra razon para reprobear la adicion, debe reformarse el dictámen de la comision, aprobándose aquella.

El Sr. CALDERON: Prescindo de si el artículo se halla extendido con la debida claridad: yo la desearia mayor que la que tiene; pero esto no influye en la justicia del dictámen.

La comision, al proponerle, solo tuvo presente el interés general. Este consiste en que se vendan muchas fincas en el menor tiempo posible y á grandes precios, para ver si se puede lograr la extincion de la Deuda y el total reintegro de los acreedores. A este fin creyó la comision ser muy conveniente no recargar con impuesto alguno el precio de las fincas que se vendiesen; porque cualquiera que se impusiese, habia de pagarse en metálico, lo cual disminuiria necesariamente el valor de aquellas que habian de pagarse en papel.

Este, en vez de tomar estimacion, permaneceria en el mismo estado ó recibiria muy poca, porque consumiéndose menos en la compra de fincas recargadas con el impuesto, abundaria más, y su abundancia le haria más despreciable, lo cual no admite la menor duda. Es, pues, del interés general de la Nacion, y lo es de los acreedores, el que no se recarguen las ventas de fincas aplicadas al Crédito público con impuesto alguno.

Aun hay otra razon, no menos poderosa, que inclinaba á la comision á seguir aquel plan. Los bienes están adjudicados al Crédito público para el pago de los acreedores, y el importe de la carga que se impusiese los defraudaria, contra todo principio de justicia, de lo que las Córtes habian prometido íntegramente para el pago de sus créditos. Se quitaria por este medio injusto lo que era debido y prometido solemnemente á los acreedores, para darlo á la Hacienda nacional, y esto desacreditaria al Congreso, infundiria desconfianza en el público y haria recordar los tiempos de calamidad en que se ofrecia mucho para no cumplir nada.

A pesar de que este era el modo de pensar de la comision, convino en que se cargase el 4 por 100; y por lo que á mí toca, confieso de buena fé que deseo le desaprueben las Córtes.

El artículo se puede poner con más claridad, y admite fácil explicacion. Debo decirlo en honor del que le extendió, como el que no me parece muy exacto el ejemplo de que se ha valido el Sr. Sancho, pues es claro que una finca vendida en un millon de reales en papel devengaria al 10 por 100 100.000 en metálico. ¿No entorpeceria las ventas y haria consumir menos papel? ¿Esto no produciria menos para la extincion de Deudas y pago de acreedores, á quienes se ha prometido el valor íntegro de bienes?

El Sr. SANCHO: Contestaré á las varias objeciones que pueden hacerse á mi adicion. Es imposible entender ni explicar el ejemplo que nos presenta la comision. No es cierto que con la medida que propongo se entorpecan las ventas ni que se disminuyan el crédito y medios de pagar. Es cierto que aparece á primera vista que si se exige un 10 por 100 para Tesorería, al cabo del año no se habrá pagado tanta Deuda como si no se hubiese distraído aquella cantidad; pero esto, que parece cierto en general, es falso en España por lo que ha de suceder en este año. Necesitamos un empréstito, ó buscar recursos de otra especie, lo cual es de absoluta necesidad. Supongamos que este 10 por 100 dé el producto de 100 millones de reales, que no dará tanto, pero para el caso es lo mismo: estos 100 millones, buscados como el año pasado, importarán 130 ó 140; de modo que al cabo del año, habiéndose hecho las mismas ventas, deberemos 30 ó 40 millones. En esto no hay duda, así como no la hay en que la Deuda se disminuye por esta operacion en lo que costará el empréstito.

Se dice que esto será un nuevo obstáculo para las ventas, y que habrá menos compradores. No hay tal cosa: el que ha de pagar el 10 por 100 empieza por darlo de menos en el remate, porque deja de dar en papel el equivalente que da en dinero, y le es indiferente darlo en dinero ó en papel. No quiero decir que le sea indiferente darlo en dinero ó en un crédito de 10, sino que para él es lo mismo dar 10 en dinero que 100 en papel, si 100 en papel cuestan solo 10 en dinero. Y si el precio del papel es variable en las plazas, tambien lo será el de las fincas que se rematan; y el que quiera comprar fincas, siempre encontrará en la plaza quien le dé papel caro ó barato, que esto es indiferente, y lo mismo le da entregar el dinero que comprar papel para darlo.

En algun modo embaraza y es un obstáculo en nuestra situacion actual la separacion ridícula de la Tesorería nacional y del Crédito público; separacion que se quiso llevar al extremo, equivocando el principio de que verdaderamente pende el crédito. El crédito no pende de esa separacion, ni la hay en las naciones que tienen más crédito; éste consiste en el sistema representativo

y en el arreglo de la Hacienda; pero existiendo esa separacion, no sacamos ningun provecho de la inmensidad de riquezas que hemos aplicado al Crédito público. ¡cuatro ó cinco mil millones á nuestra disposicion y no podemos comer! Es, pues, justo ver el modo de sacar algun partido de esa gran riqueza, para existir en la actualidad.

Añádese que esto presentará inconvenientes, pues perderemos el crédito. Digo que no. Concluido el año tendremos menos Deuda y las mismas fincas para pagarla, y no habrá que satisfacer los intereses del empréstito que se ha de buscar este año, porque el Gobierno nos lo propondrá, y no habrá más remedio que admitirlo, y tendremos esa deuda más. ¿Qué importa que haya un poco más de papel, como lo habrá, dándose en dinero y no en papel la décima parte de las fincas vendidas? ¿Qué significa esto? Es una equivocacion llamar á esos créditos papel moneda; acaso no hay error económico que haya hecho más daño. No representa ese papel dinero, sino los medios que tiene la Nacion para pagar: en habiendo mucho para pagar, sube; en habiendo poco, baja: en esto consiste el subir y el bajar el valor del papel. Si hubiese 5.000 millones para pagar 10.000, un papel con otro se daría al 50 por 100. Así, puesto que aumentar el papel en lo que equivalga este 10 por 100 es una gota de agua en el mar, y que necesitamos de este recurso para evitar mayores sacrificios; ya que la comision ha fundado en una equivocacion su dictámen, confundiendo la *tasa* con el *remate*, pido que la adiccion se apruebe, ó que vuelva á la comision para que la examine de nuevo.

El Sr. **CUESTA**: La separacion entre el Crédito público y la Tesorería general es de Constitucion, y por consiguiente, no puede variarse ni hablarse contra ella. Si, como quiere el Sr. Sancho, se exigiese un 10 por 100 en dinero al que comprase fincas, se dificultarian las ventas; porque para hallar dinero llevarian los compradores su papel á la plaza, y perderia éste más de lo que pierde ahora. Por el contrario, exigiéndose solo un 3 por 100, habrá más ventas, y producirá más el derecho que si se exigiese un 10. En cuanto al ejemplo citado por la comision, convengo en que está evidentemente equivocado, y en que debe decir *tasacion* en lugar de *remate*.

El Sr. **SANCHO**: El Sr. Cuesta parte de un supuesto que no admito. Dice S. S. que en la plaza se envilecerá el papel, porque los que lo tengan tendrán que deshacerse de él y buscar dinero para comprar las fincas del Crédito público. Este es un supuesto, repito, que yo no reconozco; porque es creer que todo el que compra estos bienes tiene ya el papel en su casa, y no es así. Ninguno que compra tiene antes el papel; lo que tiene es dinero, y con él busca el papel. ¿Quién habia de tener en su gaveta una gran cantidad de papel sin rédito? Los vales se tienen porque dan rédito, sea de la clase que fuere; pero un papel como este, que no gana interés; ¿quién lo ha de tener? Está repartido en pequeñas cantidades, adquiridas por un suministro, por un caballo vendido, etc.; siempre en pequeñas porciones. ¿Quién habia de ser tan nécio que amontonase semejante clase de papel? Así, creo que el argumento del señor Cuesta parte de suponer á cada uno con su papel en el bolsillo, y esto no es así.

El Sr. **CUESTA**: Solo los tenedores de vales tienen tal cantidad de créditos que bastarian á comprar una gran parte de las fincas aplicadas al Crédito público. Los vitalicios, las pensiones, los juros, todo este papel está

de sobra; lo que falta es numerario. Si todo este papel concurre en la plaza, adios papel; si pierde hoy un 80 por 100, mañana perderá un 90. Cargar sobre estas ventas un 2 ó 3 por 100, es suficiente. Así no se las perjudicará, y se auxiliará al Erario, que realmente se halla escasisimo; y del otro modo no se conseguirá ni uno ni otro objeto.

El Sr. **MORENO GUERRA**: No tiene duda que esta medida envilecerá el papel, sea porque tengan que ir á venderlo, si lo tienen ya comprado, los actuales postores y licitadores de fincas, ó sea porque este menos papel se invertirá en las compras, y así habrá menos que lo negocien. Esto me parece una demostracion. Pero quisiera saber si ese 4 por 100 es sobre la *tasa* ó sobre el *remate*.

El Sr. Conde de **TORENO**: Se baja el 3 por 100 en cuanto á las fincas de los particulares, y la comision ha conservado el 4 por 100 con respecto á las del Crédito público: este 4 por 100 se entiende sobre la *tasa*, no sobre el *remate*.

El Sr. **MORENO GUERRA**: Aquí dice sobre las *ventas*; y las ventas no se hacen por las tasas, sino por los remates.

El Sr. **YANDIOLA**: Se ha dicho que sobre la *tasacion* en las fincas del Crédito público.

El Sr. **MORENO GUERRA**: Entonces es menos lo que producirán las ventas del Crédito público que las de particulares; porque si de estos es el 3 por 100 de la venta, y en el otro el 4 sobre la tasacion, es infinitamente menos: y ¡desgraciados de nosotros si no lo fuera! porque seria prueba de que se llevaban las fincas del Crédito público por su tasacion, dándola en papeles que hoy pierden un 90 por 100, y resultaria que una finca tasada en 100.000 rs. se la llevarian solo por 10.000, es decir, por la décima de su legitimo valor. Por esto, y por las necesidades actuales, apruebo la indicacion del Sr. Sancho. No todo ha de pesar sobre la generacion actual; demasiado ha pesado y pesa sobre ella. Este empeño de querer pagarlo todo, y pagarlo en un día, aunque sea malvendiendo y tirando para ello 8 ó 10.000 millones, cuando no tenemos 20 pesos para pagar su mesada á un alférez, es muy ridículo. ¿Dónde estamos? Este impuesto es de absoluta necesidad: el pueblo está demasiado gravado: por bueno que sea este plan, como es nuevo, ha de tardar mucho en producir. El impuesto de registros, que es el más productivo, este año será nulo, porque toda cosa nueva, física ó moral, en los primeros momentos nada produce. Si dentro de dos meses ha de acudirse á un nuevo empréstito, ó no hemos de tener con que pagar los soldados, ¿no será mejor que sufra el crédito? Habrá ese más papel, y nuestros hijos ó nuestros nietos verán cómo se ha de pagar. ¿No tenemos para ir por un pedazo de pan, y queremos pagar todas las deudas! Es justo pagar; pero antes es existir, como hace un particular. No debe darse todo en un momento. El que compra, tiene dinero, y si tiene papel es porque lo ha negociado. Los que compran fincas no son, como se ha dicho, los tenedores de papel: estos son comerciantes y hombres á quienes no les acomoda ser propietarios de tierras; cuando más, más, compran alguna casa.

Los labradores son los que compran las fincas, porque las conocen y entienden, y para ello vienen á Madrid, ó van á Sevilla y Cádiz, y toman el papel en la plaza. Si v. gr. la finca vale un millon de reales, aprobándose la indicacion del Sr. Sancho, tendrá el comprador que dar 100.000 rs. en metálico y el resto en pa-

pel; en esos papeluchos que pierden un 90 por 100, y que si no se hubieran suspendido los suministros, perderian ya hasta el 98 por 100. Si con este impuesto podemos sacar 100 millones de reales, eso menos necesitamos, y yo creo que por esta décima en metálico habíamos de sacar más de los 100 millones, pues siempre en un año se venderán fincas por valor en sus tasaciones de más de 1.000 millones de reales. Esto será más fácil que buscar un empréstito, que será casi imposible hallarlo con condiciones ventajosas: con condiciones desventajosas se encontrará siempre, pero es sacrificándose, y no debemos hacerlo. Hay tiempo en que un duro importa más que una onza de oro en otro. Este año importan los ya dichos 100 millones de reales más que 1.000 millones otras veces, por el estado de la Nación y porque vaya estableciéndose ese plan. Así, creo que la

proposicion del Sr. *Sancho* es justa, conveniente y necesaria, y que las Córtes deben aprobarla si quieren tener algunos millones sin afligir á los pueblos, y si quieren que las fincas no se tiren y se den por nada.»

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el dictámen de la comision fué aprobado.

Se suspendió la presente discusion para continuarla en la sesion extraordinaria de esta noche.

Despues de anunciarse por el Sr. Presidente los asuntos que además de éste se tratarian en ella, como igualmente en la ordinaria de mañana, levantó la presente.

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 1821.

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion extraordinaria anterior.

Se mandó pasar á la comision ordinaria de Hacienda un expediente remitido por el Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Península, sobre haber facilitado un socorro á la viuda del brigadier D. Francisco Gonzalez Peinado, con el fin de que las Córtes se sirvan aprobarlo y resolver acerca de las nuevas solicitudes de dicha viuda.

A la comision de Diputaciones provinciales pasó igualmente una Memoria remitida por el Gobierno, del ayuntamiento de esta capital, proponiendo arbitrios para atender á todas sus cargas y obligaciones.

Se mandó pasar á las comisiones que entendieron en el dictámen de minería la siguiente indicacion del señor Del Rio:

«Se pudiera fundar una junta de minería, compuesta de los sugetos que hay aquí que han estado pensionados por el Rey en las academias de minas de Hungría y de Sajonia, y tienen la teoría y práctica correspondientes, asociados con algunos mineros prácticos que hay aquí tambien de América, para que resolviesen las dudas sobre denuncias, posesiones, litigios y demás que se ofrecieran, conforme á las ordenanzas de América.»

A las mismas comisiones pasó la proposicion del se-

ñor Diputado Milla, leida por primera vez en la sesion del 7 del presente mes, sobre la elaboracion de las minas de la provincia de Honduras.

Aprobaron las Córtes el siguiente dictámen de las comisiones de Guerra y Marina:

«El Secretario del Despacho de Marina consulta á las Córtes si el art. 2.º del decreto de 1.º de Noviembre de 1820, relativo á la fuerza del ejército, en que se manda licenciar á todos los cumplidos hasta 1.º de Enero del mismo año, es extensivo á las tropas de infantería y artillería de marina, puesto que lo solicitaban algunos individuos, sobre lo cual habia ya manifestado su parecer de conveniencia y justicia el inspector y comandante general del primer cuerpo.

Las comisiones de Guerra y Marina opinan que, ora los cumplidos hasta la fecha indicada se hayan empeñado en el servicio voluntariamente, ora llamados por la ley, una vez que cumplieron su tiempo, segun exigen la razon y la justicia, y como opina el comandante general de infantería de marina, debe dárseles sus licencias absolutas.

Consulta tambien con este motivo el Secretario del Despacho, haciendo relacion de la falta que ya se notó en la armada de tropa de infantería en Agosto del año último, si seria conveniente que, como se mandó en 1813, se destinasen á la marina los quintos de los pueblos litorales. Las comisiones son de parecer que ciertamente hay una gran conveniencia en que los quintos que se destinan para el reemplazo de la marina sean naturales de los pueblos litorales, por lo más fácil que es el que se acostumbren á la mar, y la mayor afición que deben tener á este elemento; y que bajo este con-

cepto será muy ventajoso que al reparto de los reemplazos se tenga en consideracion el asignar á la armada los que toquen á las provincias ó pueblos litorales.»

Se leyó el dictámen que sigue, de la comision de Legislacion:

«La comision de Legislacion se ha enterado por segunda vez de la consulta que hizo á las Córtes el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia sobre el curso que deban tener los expedientes que se hallaban radicados en la extinguida Junta de represalias.

La comision vió desde luego que solo se presentaban tres medios para elegir: el envío de dichos expedientes á los tribunales territoriales; la adjudicacion al Supremo de Justicia, ó la creacion de uno que entendiese especialmente en su despacho. No siendo admisible el último arbitrio, no solo porque no estaba bien marcado en el art. 278 de la Constitucion, sino porque lo resistia su espíritu, era preciso ya escoger entre los dos primeros. La comision en su primer dictámen manifestó que el envío á los tribunales territoriales presentaría gravísimas dificultades para su ejecucion; y no ha mudado de parecer sin embargo de las razones expresadas en la discusion del dia 9 del corriente.

Es indudable que la clasificacion y remesa de los expedientes ha de estar expuesta á dilaciones, riesgo de extravíos y recargo de gastos. Por otra parte, los interesados desde el año de 1816 hubieron de mandar á la córte sus poderes y fondos, en concepto de que se terminarian allí.

Tambien tuvo presente la comision que la resolucion definitiva está en algun modo enlazada con la ejecucion del art. 1.º del tratado adicional de París de 20 de Julio de 1814; y debiendo esperarse que se pare en una transaccion por medio de un ajuste alzado, era muy conveniente que permaneciesen dichos expedientes en un centro comun.

Por estas y otras razones opinó la comision que la medida menos sujeta á inconvenientes era la de pasarlos al Tribunal Supremo de Justicia; pero habiendo resuelto las Córtes que el dictámen y antecedentes volviesen á la comision, el parecer de ésta es que se remitan los mencionados expedientes á los juzgados y tribunales territoriales.»

Despues de leído el anterior dictámen, dijo el señor Rey, como individuo de la comision, que ésta se habia visto en la dura necesidad de arbitrar que los expedientes de que se trataba pasasen á los juzgados y tribunales territoriales, porque las Córtes habian desaprobado el anterior dictámen, en que se proponia se cometiese el conocimiento al Tribunal Supremo de Justicia; y que en el supuesto de prohibir la Constitucion que se formasen tribunales especiales, no habia encontrado otro arbitrio, opinando siempre que seria más conveniente que se llevase á efecto el primer dictámen. Expuso el Sr. Quintana que no debia obstar la resolucion anterior de las Córtes, si se estimaba deber pasar estos expedientes al Tribunal Supremo de Justicia. El Sr. Calatrava manifestó que desearia saber si habia un grave inconveniente en que para concluir estos asuntos habilitaran las Córtes á la misma Junta que fué de represalias, porque el remitirlos á los juzgados ó al Supremo Tribunal de Justicia ocasionaba perjuicios que ya se habian manifestado en la discusion anterior: por cuya razon opinaba que seria lo mejor autorizar provisionalmente á la

expresada Junta. El Sr. Milla propuso que se aumentase el número de individuos del Tribunal Supremo de Justicia, respecto á que la Constitucion no lo resistia.

Declarado el punto suficientemente discutido, no hubo lugar á votar el dictámen, y se mandó volver á la comision.

Continuando la discusion sobre las adiciones hechas al plan de Hacienda, aprobaron las Córtes el dictámen de la comision sobre las siguientes: del Sr. Rey, al artículo 45 de registros: del mismo señor, al art. 46: de dicho señor, al art. 2.º nota 12: del Sr. Verdú, al 53: del Sr. La-Llave, al 58: del Sr. Carrasco, al art. 2.º: del Sr. Vadillo, al 35, y del Sr. Urruela, al art. 1.º (Véase sobre todas ellas la sesion ordinaria de este dia.)

Tambien se aprobó el siguiente dictámen de la comision sobre otras varias adiciones hechas al sistema administrativo:

«La comision, despues de haber examinado las adiciones que han hecho varios Sres. Diputados á diferentes artículos de la parte del plan de Hacienda, relativa al sistema administrativo, ha adoptado las siguientes, que presenta á la aprobacion de las Córtes.

Del Sr. Tapia al art. 13.

«Que la disposicion de dicho artículo no se entienda en cuanto á las viudedades con las actuales viudas ó las mujeres de los actuales empleados, siempre que estos continúen pagando el descuento correspondiente á sus respectivos sueldos.»

La comision adopta esta indicacion respecto de las viudas y huérfanos actuales, y en cuanto á las mujeres é hijos de los empleados que existen y que no tuviesen aun arreglados sus sueldos con este respecto, hasta que se verifique dicho arreglo conforme á lo que se previene en dicho artículo.

Del Sr. Echeverría al mismo artículo.

«Que á las palabras «sufran descuentos,» se añada «ni pierdan las pensiones si se casaren.»

La comision la adopta en cuanto á la mitad de la pension, si se casaren antes de los 40 años.

Del Sr. Ramonet al mismo artículo.

«Que obtengan las viudas su pension durante su viudedad, y los huérfanos hasta la edad de 25 años.»

Se adopta en los términos que previene el Reglamento.

Del Sr. Tapia al art. 18.

«Que á las palabras «la Nacion no pagará sueldos ni gratificaciones bajo ningun título á los empleados que en adelante sean separados de sus empleos,» se añada: «con justo motivo que deberá expresarse en la orden de su separacion.»

La comision la adopta, entendiéndose solamente respecto de los empleados actuales.

Del Sr. Espeleta al art. 77.

«Que se añadan al final estas palabras: «expresando si son de regadío ó secano.»

Se adopta en los mismos términos.

Del mismo señor al art. 268.

«Que se añada al fin de él: «ni los caballos ni armas de los militares en activo servicio.»

La comision la adopta en los mismos términos.

La comision añade además este artículo á los aprobados ya respecto de los tesoreros:

«Artículo 1.º Los tesoreros de provincia continuarán siendo propuestos por el tesorero general de la Nacion, con arreglo al decreto de las Córtes de 2 de Noviembre de 1820.»

Del Sr. Quiroga al art. 177.

«Que se añadan á él estas palabras: «despues de las contribuciones que recauden en la primera semana de arqueo.»

La comision sustituye en lugar de lo propuesto por el Sr. Quiroga, lo siguiente:

«El Gobierno pondrá en ejecucion este artículo segun se vayan presentando los sugetos para las plazas, capaces de desempeñarlas, con las fianzas en los términos que se previene.»

Tambien se aprobó otra parte del dictámen en esta forma:

«Habiendo vuelto á la comision el art. 40, que trata de sueldos de los escribientes de las direcciones, se rebajan, y se propone para los primeros el sueldo de 6.600 reales, y de 5.500 para los segundos.

El Gobierno nombrará uno ó dos contralores, segun la extension que diere á las subdelegaciones. (*Se refiere al art. 102.*)

Se aprobaron igualmente los artículos siguientes, presentados de nuevo por la comision:

«Art. 23. Habrá partidos administrativos, y se compondrán de uno, dos ó más partidos judiciales, segun el Gobierno lo estimare conveniente, atendida la situacion y demás circunstancias. Estos partidos se llamarán subdelegaciones.

Art. 24. En cada una de estas subdelegaciones habrá una comision compuesta de cinco individuos, vecinos de algun arraigo, cuyo nombramiento se hará por una junta de electores nombrados por los ayuntamientos, uno por cada uno de ellos. Esta comision se renovará cada dos años, antes del tiempo en que se haga el repartimiento de la contribucion directa. Tendrá 30 sesiones á lo más, y hará de secretario uno de los mismos comisionados, nombrado á pluralidad de votos.

Art. 25. En cada subdelegacion habrá un subdelegado, que presidirá la comision y ejercerá en los pueblos de su distrito la misma autoridad que el jefe político ó intendente en toda la provincia, con subordinacion á estos respectivamente. El mismo convocará la junta de electores de la comision al tiempo que esta deba renovarse, y la presidirá.

Art. 26. Habrá asimismo en cada subdelegacion un depositario con sujecion al tesorero de provincia.

Art. 27. La residencia de estos subdelegados y depositarios será en el pueblo que señale el Gobierno, quien cuidará de que estos empleos recaigan en lo posible en sugetos de arraigo de la misma subdelegacion, ó en personas que gocen otro sueldo.

Art. 28. Los subdelegados gozarán de un sueldo desde 5.000 á 15.000 rs., segun la extension ó importancia de las subdelegaciones, á juicio del Gobierno.

Art. 29. Los depositarios tendrán un sueldo de 4.000 á 9.000 rs., segun las mismas reglas dichas y á juicio del Gobierno.»

No se admitieron á discusion las adiciones que siguen, del Sr. Romero Alpuente:

«Al art. 2.º del capítulo sobre diezmos: «En cuanto conviniese hasta llenar sus atenciones y dotaciones que se señalasen en el arreglo eclesiástico; y el sobrante se aplica tambien exclusivamente al pago de la contribucion territorial sobre las rentas de los prédios rústicos.»

Al art. 10 del mismo capítulo: «Además de estos individuos, compondrá la junta de las capitales el jefe político superior y dos vocales de la Diputacion provincial, y en las cabezas de partido el alcalde primero constitucional y dos regidores, presidiéndola siempre la autoridad civil.»

Se leyó, admitió á discusion y fué aprobada la adicion que sigue, de los Sres. Vallejo, Castrillo, Gareli, Cortés, Cepero, Priego, Valle, Villanueva y La-Madrid, al art. 4.º sobre diezmos:

«Pedimos que en el traspaso de bienes de iglesias á los perceptores legos de diezmos para su indemnizacion, se averigüen las cargas de justicia con que fueron gravados por el fundador al tiempo de entrarlos en la amortizacion eclesiástica, y deduciendo el valor de su capital, se imponga al nuevo poseedor la obligacion de satisfacerlas.

Igual operacion se practicará con las fincas de las capellanías de sangre, cuando se devuelvan á los parientes abintestato; observándose para la distribucion de dichas cargas el art. 7.º de la ley de 27 de Setiembre de 1820.»

No se admitió á discusion la siguiente, del Sr. Lobato, al art. 2.º sobre diezmos:

«Este producto anual se aplica exclusivamente á la dotacion del clero y del culto; y si aquel no fuese bastante, se completará lo que se determine con el producto de los bienes raices necesarios para ello; á cuyo fin no se aplicarán de hecho al Estado para la indemnizacion designada en el art. 4.º, hasta que se asegure de un modo fijo dicha dotacion.»

Se leyó la que sigue, del mismo señor, al mencionado art. 4.º:

«Menos las casas que necesiten para vivir los prebendados y capellanes de ellas, á lo menos despues de reducido su número al preciso para llenar las atenciones del Estado.»

Para apoyarla, dijo el Sr. Lobato que no veia razon alguna para que los prebendados y capellanes fuesen de peor condicion que los curas párrocos; y que respecto á haberse exceptuado las casas que habitaban estos, le parecia justo se hiciese lo mismo con la de aquellos, pues seria muy violento que estándolas poseyendo por toda su vida, los echase á la calle un nuevo comprador.

El Sr. PRIEGO: No creia contestar al Sr. Lobato sobre si deben conservarse las casas de los canónigos; pero S. S. ha citado los curas párrocos, diciendo que los canónigos serian de peor condicion que los curas párrocos si no se adoptase su indicacion, y á esto debo precisamente contestar, para hacer ver al Sr. Lobato que por desgracia en España los curas párrocos tienen pocas casas propias, porque han sido mirados con mucho desprecio, y jamás han tenido casas sino muy pocos en algunos obispados. Yo soy cura párroco, y he tenido que comprarla ó alquilarla, y lo mismo sucederá á todos; sin embargo de la necesidad que tienen los curas párrocos de ellas, nada han pedido. Los curas párrocos no deberian vivir á mucha distancia de las iglesias, para poder dar los sacramentos cuando hay enfermos; pues si viven lejos, cuando llegan á administrar al enfermo

suelen llegar tarde, y esto causa verdaderamente un daño espiritual y temporal muy grave; pero á un canónigo, que nada tiene que hacer en la iglesia sino en las horas ya determinadas y regulares, que no tiene que ir allí de noche, sino que se queda muy quietecito en su casa, ¿qué perjuicio se le sigue con negarle lo que intenta el Sr. Lobato? ¿Y qué comparacion puede hacer S. S. entre éstos y los curas párrocos, por los perjuicios que á estos se seguirian privándoles de dichas casas?

El Sr. Conde de **TORENO**: Me opongo á la adición por injusta, y porque si de este modo disminuimos los bienes que están designados para la indemnización de los partícipes en diezmos, no tendremos modo de cubrir este deber. Hay catedral donde son 80 los canónigos, y cada uno tiene su casa. La comision ha deferido en favor de los Obispos y curas, y querria de muy buena gana deferir tambien, no solo á que conservasen sus casas los canónigos, sino la totalidad de sus prebendas, á lo menos los existentes; pero se trata de aplicar un arbitrio á objeto muy privilegiado que no hay otro modo de cubrir, y no es posible que las Córtes defieran á lo que solicita el Sr. Lobato.

El Sr. **SIERRA PAMBLEY**: La comision no ve motivo para que se admita esta adición; porque no habiendo baja en la renta de los eclesiásticos, vendria á constituirse un aumento, en oposicion de algun modo con lo mandado. Estos bienes, como ha dicho muy bien el Sr. Conde de Toreno, se han destinado para indemnizar á los poseedores legos, y no hay otro modo de reintegrarlos. Lo único que podria hacerse seria que las casas que viven los canónigos fuesen las últimas que se adjudicasen, y que en el ínterin pagasen el importe del arriendo al Crédito público.

El Sr. Conde de **TORENO**: Me opongo á toda clase de modificación; porque habiéndose de disponer libremente de estos bienes, seria un perjuicio notable el que los compradores no pudiesen tener opcion desde ahora á estas fincas: además de que los canónigos las poseen por un cortísimo arrendamiento, y el Crédito público vendria á reportar muy poca ó ninguna utilidad de lo que se propone.»

Declarado el punto suficientemente discutido, no hubo lugar á votar la adición.

Se aprobaron por las Córtes varios dictámenes de la comision ordinaria de Hacienda, concebidos en estos términos:

«La comision ordinaria de Hacienda presenta á la resolución de las Córtes, resueltos favorablemente, los expedientes que á continuacion se expresan:

El de Juan de la Rosa, solicitando rebaja en el arriendo de un terreno que le dió el ayuntamiento, en atención á haber faltado uno de los principales rendimientos.

El de Isidro Muñoz, Celedonio Diez y Francisco García, solicitando el primero se le modere ó tase el precio de las yerbas de la Serena que lleva en arriendo, y los dos últimos que se les rebaje lo que pagan por las de Fuentes de las Cabezas, cuya solicitud apoyó el Gobierno.

El de Celestino Hinojosa, alcalde que fué en 1814 de la villa de Seron, en solicitud de que no se le declare responsable al pago de 5.713 rs. que debe aquella villa por el censo de poblacion de Granada, correspondientes

al mismo año, en atención á haberse cubierto indebidamente en cupo de los años de 810 y 811 que estuvo ocupada por los franceses.

El de D. Antonio Chain, sobre que se costee su educacion en el seminario de Vergara por cuenta del Gobierno, segun se determinó por Real órden de 17 de Febrero de 1819, en atención á los extraordinarios méritos que contrajo su padre en Montevideo y á las pérdidas millonarias que sufrió por no sujetarse á los disidentes.

El de Doña Josefa Partian, viuda del mayordomo del hospital de la plaza de Alhucemas, solicitando la racion de presidio de 68 mrs. diarios, en atención á su miseria y á que no tiene ningun derecho á Monte-pío.

El de la Real casa de Penitencia, vulgo Recogidas, de esta córte, sobre que se le continúe la consignacion de 2.000 rs. que disfrutaba en cada extraccion de la lotería desde 1767, ó que se le asignen 12.000 reales anuales de los fondos de expólitos, segun propone el colector general y apoya el Gobierno.

El de las monjas capuchinas de la Coruña, sobre que se exonere del pago de derechos á dos cajas de azúcar que les han remitido de limosna desde la Habana.

El de D. José Salvadores, D. Miguel y D. Rafael de la Puente, en solicitud de que se les admitan créditos liquidados en pago de lo que adeudan como arrendatarios de las rentas de la mitra de Astorga en el año de 1817. La comision opina, de acuerdo con el Gobierno, que puede rebajárseles la tercera parte de lo que adeudan, con tal que esta gracia se haga extensiva proporcionalmente á los subarrendatarios.

El de D. Juan Moriarti, capitan separado del servicio, sobre que se le continúe pagando la pension de 6 reales diarios que se le concedió por vía de limosna en Octubre de 1817. De acuerdo con el Gobierno, opina la comision que puede accederse á esta solicitud, en atención á que cuando fué separado de su empleo este interesado por haber servido al intruso, tenia 70 años de edad.

El de D. Pedro Alonso Ablanado y D. José Benito Portela, solicitando con apoyo del Crédito público, el primero que se le perdone la tercera parte de 25 418 reales que adeuda por el arrendamiento de préstamos de San Vicente de Oviedo, y el segundo que se le rebaje á 1.200 rs. el precio de 1.663 en que tiene arrendados unos diezmos.

El de D. Francisco Arauz, en solicitud de que se le rebaje el arrendamiento de los pastos de invernaderos en los campos de Calatrava. La comision, en vista del informe favorable de la Junta del Crédito público y del apoyo del Gobierno, halla arreglada esta solicitud.

El de D. Francisco Fustegera, vecino de Zaragoza, en solicitud de que se le perdone una parte del arrendamiento de las encomiendas de Orta y Corvera. La comision, de acuerdo con el informe de la Junta del Crédito público, opina que puede rebajársele la quinta parte de lo que está adeudando, obligándose á pagar lo restante dentro del término más preciso que le señale el Gobierno.

El de Esperanza Casanova, viuda de D. Marcos Ferrera, soldado que fué de Reales Guardias de infantería, en solicitud de una pension para concluir sin mendigar el resto de sus dias. La comision opina que en atención á que el marido de la interesada sirvió cincuenta y seis años y que tiene su hijo en el ejército con treinta y un años de servicio, puede autorizarse al Gobierno para que siendo cierta esta exposicion, la socorra con 3 rs. diarios durante su vida.

El de Gregoria Lopez, en solicitud de que se le condonen 35.000 rs. que al tiempo de morir le dijo su marido debía á la Hacienda pública, y cuya cantidad no puede satisfacer por su absoluta pobreza.

El de D. Miguel Montero Gonzalez, regidor y comisionado del ayuntamiento de la ciudad de San Fernando, en solicitud de que se exonere á aquella corporacion de toda responsabilidad en el pago del cupo de sal del presente año, en atencion á las circunstancias que han ocurrido. La comision, de acuerdo con el informe de la Direccion de la Hacienda pública, opina debe accederse á esta solicitud, solamente en cuanto á la mitad del cupo de sal que corresponde en este año á dicha ciudad.

Se leyó el dictámen de la comision de Legislacion sobre el modo y tiempo de admitir á exámen á los alumnos de farmacia (*Véase la sesion ordinaria de este dia*); y tomando la palabra, dijo

El Sr. GARCÍA (D. Antonio): El dictámen de la comision abraza dos partes: una es relativa á la dispensa de la edad, y la otra á que los farmacéuticos deban estudiar en sus colegios para poder ejercer la farmacia. En cuanto á la primera parte nada tengo que decir: estoy muy persuadido de que es conveniente que se derogue esta ley; pero en cuanto á la segunda, Señor, ¿cómo puede aprobarse, si es contraria á la base general que ya tienen adoptada las Córtes? El Congreso en la base general de enseñanza pública ha admitido las escuelas privadas para todas las ciencias y facultades, sin que el Gobierno tenga más intervencion en estas que la de una buena policía, y de que no se enseñen principios contrarios á la religion y al sistema que nos rige, entendiéndose esta libertad de escuelas privadas para las facultades de tercera enseñanza, sin que se necesite otra cosa para su ejercicio que presentarse á exámenes y dar una prueba de su idoneidad. Con que decir ahora que los boticarios precisamente hayan de estudiar en los colegios es trastornar la base adoptada por las Córtes con motivo de una indicacion que tuve el honor de presentar, y que aprobó el Congreso. Señor, que tendremos malos boticarios. Esto quiere decir que es necesario reglamentar y apretar bien la mano en los exámenes; pero que no valgan para los farmacéuticos las escuelas privadas, es querer derogar lo que en esta legislatura hemos establecido. Así, pues, digo que debe admitirse la primera parte del dictámen de la comision; pero en cuanto á la segunda, no puede haber lugar á votar.

El Sr. ECHEVERRIA: Me parece que no solo es conveniente lo que propone la comision, sino que es necesario. Porque de otro modo, ¿qué sucederá? Lo que estamos viendo todos los dias: que se presentan aquí para recibirse de boticarios jóvenes enteramente desprovistos de los conocimientos necesarios para ejercer la farmacia, sin haber saludado siquiera los principios de la ortognosia ni de ninguna otra de las ciencias auxiliares. Son muy pocas las cátedras de estas ciencias, y solo están en los colegios de las capitales de provincias y bajo este concepto ha extendido la comision su dictámen. Si se ha de seguir estudiando la farmacia por solo la rutina de los maestros particulares, nunca llegará al estado que debo esta ciencia tan necesaria á la salud pública. Así, he visto yo por mis propios ojos á un boticario con fundir un *echium vulgare* con un *simplitum*, diciendo que ambas á dos eran plantas de la misma familia natural de

las *borragíneas*. De este modo, y mientras no se lleguen á conocer bien las afinidades de las plantas, como lo ha demostrado perfectamente el famoso Decandolle, es imposible que las ciencias médicas lleguen al estado de perfeccion que debemos desear. Esto es lo que ha tenido presente la comision para hacer que se estudien las ciencias auxiliares, porque de otro modo nos exponemos á que continúe el método rutinero de aprobar á jóvenes que no tengan más que los pocos conocimientos prácticos que han adquirido en la botica de su maestro, con grave perjuicio de la salud pública.

El Sr. JANER: La primera parte del dictámen es respectiva á que puedan ser examinados los farmacéuticos antes de la edad de 25 años, y la segunda á que estos exámenes se ejecuten precisamente en los colegios. Acerca de estas dos partes nada ha dicho el Sr. Garcia, y solo se ha opuesto á la tercera, en que se dice que los estudios de esta facultad se hagan tambien en dichos colegios. Es necesario tener presente que no hay otra parte donde se pueda aprender esta facultad sino en los colegios. Hasta ahora se ha seguido el régimen absurdo de permanecer un muchacho acaso en la botica de una aldea, y presentarse con una certificacion de un boticario para ser examinado; de lo cual ya ve el Congreso los perjuicios que pueden seguirse, mucho más si han de ser examinados por los boticarios de cualquier pueblo. La comision, con objeto de evitar estos males, previene en su dictámen que los exámenes se hagan en los colegios, y los estudios tambien, porque no hay otra parte donde adquirir los conocimientos debidos, y porque las Córtes han acordado la enseñanza uniforme.

El Sr. GARCÍA (D. Antonio): Yo no me he opuesto á la primera ni á la segunda parte del dictámen, y solo me opongo á que se hagan proposiciones contradictorias con lo que ya tiene determinado el Congreso.»

Declarado el punto suficientemente discutido, se aprobaron las dos primeras partes del dictámen, y no hubo lugar á votar la última.

Se leyó la adicion siguiente, de los Sres. Garcia y Cortés, á la parte segunda del anterior dictámen: «sin que jamás se dispense esta segunda condicion.»

En apoyo de esta adicion dijo el Sr. Cortés que ya estaba mandado por órdenes antiguas que los alumnos se examinasen en la Junta de farmacia; pero que á pesar de estas órdenes, se sacaban dispensas para examinarse en cualquier parte, lo cual originaba perjuicios notables, porque se daba lugar á las intrigas y al favor, y se aprobaban personas del todo ineptas.

Contestó el Sr. Gareli que no sabia se pudiese hacer una ley prohibiendo á las Córtes venideras el que la alterasen si lo tenían por conveniente ó las circunstancias lo exigian: que estaba conforme en que se desechasen las solicitudes que se hiciesen para dispensas, pero no en que se prohibiese á las Córtes sucesivas el derogar ó enmendar una ley, para lo cual no habia facultades en el Congreso.

Añadió el Sr. Zapata que tampoco era solo el colegio de Madrid, pues lo habia en Santiago, Barcelona y Sevilla; y que no hallaba motivo para que dejase de permitirse los exámenes en ellos.

Declarado el punto suficientemente discutido, no hubo lugar á votar la adicion.

Tambien se leyó la que sigue, del Sr. Janer:

«Pido que se añada «y con los estudios y conocimientos que exige la ordenanza de farmacia, aunque éstos se hayan adquirido fuera de los mismos colegios.»

Para apoyarla, dijo

El Sr. **JANER**: Me parece que esta adición es absolutamente necesaria, pues no hay razón para que se dispense á los que no hayan cursado en los colegios de farmacia, de los exámenes que deben sufrir sus alumnos; y si no se hace así, lo que va á suceder es que cada día irá en disminución el número de alumnos del colegio de farmacia: así en este año ya no ha habido tantos cursantes. La razón es clara. Si la certificación de práctica hecha en una botica basta para presentarse á exámenes y ser revalidados en farmacia, no acudirán á cursar en los colegios, y vendrán á ser examinados como ahora está sucediendo, que no se les examina más que de un poco de práctica, porque como han estudiado solo en botica, y en ésta no se aprenden la zoología botánica y demás ciencias de que un farmacéutico bueno no puede carecer, no se les puede examinar de otra cosa que de la sola práctica, imperfecta sin duda, que deben tener, por falta de los conocimientos teóricos indispensables. Por tanto, para que tengan la debida instrucción, y para que se cumpla el fin del dictámen de la comisión de Legislación, debe hacerse esta adición.

El Sr. **QUINTANA**: Esta adición no puede admitirse por supérflua ó injuriosa. Lo primero: ¿no está aprobado ya que los exámenes sean en los colegios? En este supuesto, ¿podrá temerse que los exámenes sean de teología ó de leyes? Serán de los conocimientos necesarios para desempeñar la profesión. ¿Y no sabrán los maestros cómo deben examinar á los muchachos? Esta es la razón por que he dicho que esta adición era injuriosa, pues supone que los examinadores, ó no saben su obligación, ó no la cumplen. Así, me opongo á ella.

El Sr. **JANER**: Suplico al Sr. Secretario se sirva leer esta parte del dictámen, para que se vea que no es supérflua ni injuriosa mi adición, como ha dicho el señor Quintana. Yo la he puesto en razón de que sé que no se examinan sino de la parte práctica de farmacia,

porque los maestros no pueden examinarles de otra cosa, pues saben que no han estudiado la parte teórica en el modo que se debe.»

Se declaró el punto deliberado, y se admitió á discusión. En seguida de lo cual, dijo

El Sr. **SAN MIGUEL**: Me opongo á la adición por inoportuna ó impertinente. El origen de este dictámen fué el haber solicitado un individuo se le dispensase la edad para examinarse en farmacia. Esta solicitud pasó á la comisión, que hizo extensiva esta dispensa, añadiendo que los exámenes se hagan en los colegios y los estudios también. A esto último termina la adición; y aunque no se halla todavía aprobado el particular de la enseñanza privada, porque solo ha pasado á la comisión la propuesta del Sr. García sobre este asunto, tampoco debe acordarse nada que esté en oposición con esta medida.»

Declarado el punto discutido, se procedió á la votación; y como se ofreciese duda al Sr. Secretario, dispuso el Sr. *Presidente* se procediese á contar el número de Sres. Diputados, y resultó no haber el suficiente para acordar un punto de ley, por cuya razón quedó suspendida la resolución de este particular.

Aprobaron las Córtes la siguiente indicación de los Sres. Alaman, Murphy, La-Llave (D. Pablo), Puchet y Marqués del Apartado:

«Pedimos que á la comisión que entiende en el asunto de aranceles, que ha sido ya remitido por el Gobierno, se agreguen otros Diputados que posean conocimientos del comercio de Ultramar, porque de otro modo no podrá despacharse con la brevedad y acierto que exige su importancia.»

Se levantó la sesión.